

Índice

Presentación

FERNANDO BELAUNZARÁN 9

1989-2019. Representación política en una época de desgarramiento social

MARIANO SÁNCHEZ TALANQUER 13

1989. El año mágico del fin de la historia Un mosaico del escenario público cuando nace el PRD

RAÚL TREJO DELARBRE 77

Legados duraderos: Cómo los años formativos del PRD marcaron su desarrollo subsecuente

KATHLEEN BRUHN 117

Oportunidades perdidas: El EZLN, el movimiento zapatista y el PRD

MARÍA DE LA LUZ INCLÁN OSEGUERA 161

El PRD y el cambio democrátizador (Los noventa) JOSÉ WOLDENBERG.....	187
Zenit y nadir del sol azteca: Los votantes del PRD, 2000-2018 ALEJANDRO MORENO.....	217
El PRD: la capital como bastión JACQUELINE PESCHARD.....	247
Entre la confrontación y el pacto, una insti- tucionalidad deformada: caudillismo, lucha de clientelas y estrategia política en el PRD JORGE JAVIER ROMERO VADILLO	283
PRD: escena primaria, mito, silencio ARIEL RODRÍGUEZ KURI	327
Semblanzas de autores	359

1989-2019. Representación política en una época de desgarramiento social

MARIANO SÁNCHEZ TALANQUER

Este ensayo es un recuento de los grandes ejes de cambio en una sociedad que en treinta años se volvió otra y del papel de un partido político en la absorción de extraordinarias tensiones producidas por ese cambio. Como todo recuento es incompleto, pero trata de resaltar las muchas necesidades y fracturas sociales que en el México convulso de las últimas décadas, habrían quedado políticamente mudas sin el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es por tanto una valoración retrospectiva, fundada en hechos y la experiencia de otros países, de la contribución representativa de ese partido —con su oposición indisciplinada, tenaz, a menudo incluso intransigente— a la todavía corta convivencia democrática nacional.

Dos aclaraciones iniciales, a propósito de las transformaciones que han sacudido a la sociedad mexicana. Primera: su raíz es sobre todo económica y económica en los últimos treinta años quiere decir también global. La esencia de esa reorientación vertiginosa es la extensión del liberalismo de mercado, que alteró mucho más que la producción y el intercambio de bienes materiales. Como escribió Polanyi tras la ola globalizadora del siglo diecinueve, la que se estrelló con la Gran Depresión, el fascismo y el comunismo, el sistema económico está entretejido con las instituciones y las relaciones sociales. Esta

vez como antes, el tránsito hacia el modelo de mercado “creció hacia una enormidad sociológica” (Polanyi 2014, 333). Sus efectos se extendieron por el cuerpo social — disolviendo lazos organizativos, clausurando viejos canales de representación de intereses, introduciendo nuevas inseguridades y fomentando la individualización de la experiencia vital. Un nuevo régimen económico, centrado en el mercado, dislocó a la sociedad.

Ese proceso incubó en todos lados un descontento típicamente fragmentado, pero que más tarde o más temprano terminó por irrumpir en la arena política, de diferentes formas. A veces, como sucedió en varios países latinoamericanos al cambio de milenio, explosiones populares hundieron a los partidos tradicionales vinculados con el “neoliberalismo”, desbordaron a la democracia representativa y alimentaron movimientos de “refundación” constitucional. Otras, como ocurre en los reacomodos actuales en países de capitalismo avanzado, las secuelas de la Gran Recesión se combinaron con resentimientos acumulados entre los perdedores de la globalización para cristalizar en virulentas reacciones antielitistas, nacionalistas y xenóforas: *Lock her up!* y *Make America Great Again*.¹

En México, sostengo, las fuerzas desatadas por el avance de la sociedad de mercado tuvieron temprana y virtuosamente al PRD como representante democrático —una expresión política de muy reales afectaciones sociales que, en otros lugares, carecieron por largo tiempo de cauce y voz partidista. El déficit representativo en varios sistemas partidistas, en la

¹ Ambos, eslóganes de la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. *Lock her up!* (¡Enciérrenla!) era el canto utilizado por los seguidores de Trump para referirse a Hillary Clinton, la candidata Demócrata en 2016, identificada por sus críticos como una figura del *establishment* cercana a intereses financieros y empresas multinacionales.

era de la globalización económica, empobreció la democracia y la volvió vulnerable a más violentas reacciones futuras. Aquí, por el surgimiento del PRD en el ocaso del régimen político posrevolucionario, la protesta pudo ser predominantemente electoral.

Segunda aclaración: no por enfatizar las varias metamorfosis a las que el país ha estado sujeto paso por alto las varias continuidades de la historia, por encima de todas, la desigualdad que recorre a las instituciones sociales. Por el contrario, parto de la observación de que las transformaciones de las últimas décadas cargaron con una pesada herencia de exclusión social, que muchas veces no sólo no pudieron corregir sino agravaron. La desigualdad siguió siendo signo de los tiempos, pero merced al cambio económico y la redefinición del papel del Estado, reencarnó en nuevas modalidades. Se extendieron entre la sociedad formas de precariedad distintivas del modelo económico liberal, es decir, propias de una exposición más individualizada y cruda a la operación de las fuerzas del mercado, domésticas y globales.

Es sobre estas bases que sostengo que la irrupción del PRD en el mapa de la representación fue una válvula democrática para el desfogue de nuevas presiones, ansiedades e inseguridades que asaltaron a la sociedad. El PRD, sugiero, es un partido marcado desde su nacimiento por los rompimientos que la adopción del liberalismo de mercado produjo en la sociedad. El reajuste fue tectónico. De la mano de la revolución en las comunicaciones, el país se abrió al mundo, se disparó la migración interna e internacional, mudaron las costumbres y se revolucionaron los patrones de consumo. En algunas regiones y sectores, el avance del liberalismo económico mexicano significó inversión, dinamismo, mayor prosperidad. Globalización y

mercado anclaron un proyecto de desarrollo e inserción en una nueva modernidad.

Pero la penetración de los incentivos del mercado en más y más esferas sacudió a tal grado al individuo, la familia, las asociaciones, la empresa privada y al propio edificio del Estado, que modificó para grandes números el modo de pertenecer a esta sociedad. Al paso de crisis y recesiones económicas (1982, 1994, 2002, 2009), privatizaciones, medidas de austeridad gubernamental y liberalizaciones fueron quedando múltiples afectaciones, carencias e incertidumbres. Un consenso económico liberal se instaló entre las élites gobernantes, pero no en la sociedad. En ella se mantenían las contradicciones de intereses y visiones. Surgían nuevas oportunidades y ganadores, pero también nuevos agravios y desigualdades.

La significación política de esas nuevas tensiones fue el PRD —un gran receptáculo de intereses desamparados en tiempos de cambio. En plena turbulencia, el partido asumió la tarea de controvertir, desde la política electoral, aspectos fundamentales del liberalismo de mercado y su forma de implementación local (desde arriba, oligárquica y plagada de conflictos de interés, cuando no de dura corrupción). En tanto partido opositor surgido con prontitud del quiebre programático del PRI con el nacionalismo revolucionario, logró dar traducción política a un malestar de nuevo cuño —el malestar de la sociedad de mercado del cambio de siglo, en su versión mexicana.

En una palabra, el PRD es el protagonista del encauzamiento institucional de las convulsiones sociales desatadas por un nuevo régimen económico, en la década final de la larga transición mexicana a la democracia y bajo ese régimen, después. Por “encauzamiento institucional” no quiero decir la supresión del conflicto entre intereses, propia del autoritarismo. Tampoco

su disolución o la reconciliación final de las contradicciones, sueño de distintas corrientes e *ismos*. Conflicto y antagonismo son asumidos aquí como intrínsecos a la adopción de medidas vinculantes (respaldadas por la fuerza) dentro de una comunidad en condiciones de pluralismo político. Es decir, aceptados como inherentes a la sociedad misma —contra la pretensión de poner fin al disenso y la contestación legítima mediante la sumisión a *una* entidad única y superior, que emparenta a la tecnocracia con el populismo: *la* Verdad científica en un caso, *la* Voluntad del “pueblo” en el otro.

Hablo del procesamiento institucional del conflicto, en cambio, como el despliegue de visiones políticas contrapuestas dentro de márgenes comunes, compatibles con la libertad política colectiva —con la posibilidad de las asociaciones humanas de autodeterminarse mediante procesos libres de selección de gobernantes. Me refiero a la coexistencia humana sin descenso en espirales de violencia política, quiebres del orden constitucional ni exclusión de demandas extendidas en la comunidad política, de un tipo o de otro. En regímenes democráticos, ello depende de la representación de los intereses no solo distintos, sino contrarios, por parte de actores colectivos —los partidos— que luchan entre sí en una arena habilitada para ese fin —las elecciones libres y equitativas.

El procesamiento institucional del conflicto, argumento aquí, fue lo que la presencia del PRD hizo posible para el México de cambio de siglo. En treinta años, ese partido dio forma y expresión democrática a agravios tangibles de amplios segmentos de la población mexicana, reclamos que surgían de una reconfiguración económica y social profunda —en varios sentidos, una *desestructuración* de la sociedad. Lo hizo además en una época histórica determinante. Con el sistema de mercado redefiniendo

intereses, trastocando la sociedad y creando nuevas vulnerabilidades sobre el trasfondo de la vieja desigualdad estructural, el PRD recogió el grueso del descontento existente y lo situó en la arena electoral. Ante viejas y nuevas formas de exclusión socioeconómica, se erigió como factor de inclusión política. Por esa crucial labor representativa, desplegada a contracorriente, fue un agente democratizante al fin del siglo veinte, y después, entrado el veintiuno, de estabilización democrática.

PLAN DE RUTA

Las páginas siguientes discuten los grandes parámetros del convulsionado entorno económico, social y demográfico en el que el PRD se abrió paso, hasta convertirse en un protagonista de la competencia electoral durante treinta años. El repaso abarca la transición demográfica; el control del territorio, la urbanización y gestión de los servicios públicos; y el cambio de modelo de desarrollo hacia el mercado. En este último punto, me concentro en tres de sus derivaciones principales, a saber, la precarización del trabajo, la profundización de brechas regionales y la gestación de un nuevo tipo de formación social, más fluida e individualizada. Sacrifico profundidad en aras de ofrecer una visión de conjunto, pero en cada uno de los temas, subrayo la función ejercida por el PRD: desahogar en el sistema electoral representativo los nuevos malestares de la sociedad mexicana que, entre reformas económicas y la reorientación del Estado, cruzaba del siglo XX al XXI.

El ensayo concluye con una reflexión sobre la forma en la que el PRD determinó la trayectoria del sistema político mexicano en la era final del autoritarismo priista y las primeras dos décadas democráticas. Este análisis se funda en una compara-

ción con otros países latinoamericanos que, sujetos a tensiones similares por el giro regional (y global) hacia el liberalismo de mercado, carecieron de un vehículo partidista como el PRD, que controvertiera aspectos fundamentales del nuevo modelo y expresara la inconformidad de sectores sociales afectados.

En esos casos, un déficit representativo terminaría engendrando exitosos movimientos antisistémicos en los albores del siglo XXI, como el Chavismo venezolano o el Masismo boliviano. Estos movimientos reactivos dieron voz a grupos que habían sido excluidos de la representación política en las décadas del “consenso de Washington” y lanzaron un cuestionamiento profundo a las jerarquías sociales. Sin embargo, su llegada al poder desembocó típicamente en una erosión de libertades y un desequilibrio en las condiciones de competencia electoral —es decir, en la desinstitucionalización de la democracia constitucional.

IMPLICACIONES Y CONTRIBUCIONES

Además de perseguir una mejor comprensión del papel del PRD en la trayectoria política del país, este análisis de los fundamentos económicos y sociales de su respaldo electoral reviste un interés teórico más general. La mayoría de los estudios sobre el sistema de partidos en nuevas democracias como la mexicana consideran que la perspectiva sociológica es de poca ayuda para comprender el comportamiento electoral. En comparación con democracias avanzadas, las identidades partidistas en el país están poco extendidas en el electorado y son relativamente débiles e inestables aun entre simpatizantes, con la excepción de un pequeño núcleo duro que garantiza solo unos cuantos puntos porcentuales. En cada elección, los partidos se juegan el grueso de su apoyo.

Más aún, contra algunas expectativas teóricas (Converse 1969), el paso del tiempo o la habituación a la competencia democrática no han cambiado este panorama. La identificación partidista permanece restringida a una minoría y, si acaso, se ha debilitado en el tiempo. Los estudios empíricos resaltan, por tanto, la importancia de las campañas electorales y factores de corto plazo en las decisiones de un electorado con opciones estables en la boleta, pero volátil a nivel de masas. A falta de lealtades incondicionales que estructuren el comportamiento individual elección tras elección, las decisiones de voto son muy susceptibles a variables coyunturales, como las características de los candidatos, las evaluaciones del gobierno en turno o la exposición a los mensajes publicitarios antes de los comicios (Greene 2011). La estabilidad del sistema de partidos mexicano —el más estable en América Latina, con el uruguayo— debe más a la constancia en la oferta partidista en la boleta que a adhesiones partidistas rígidas entre los votantes (Greene and Sánchez-Talanquer 2018).

En el mismo sentido, se ha mostrado que variables demográficas asociadas a las divisiones sociales, como el ingreso o la clase, la religiosidad, la educación, la edad o el género tienen un poder explicativo limitado sobre el comportamiento electoral. Según Lawson, “los factores demográficos predicen sólo de manera débil las decisiones de voto. En otras palabras, a pesar de la polarización aparente entre derecha e izquierda, los ‘clivajes’ [divisiones] sociales a nivel de masas permanecen tibios [en el sistema de partidos]”. En esta interpretación, la competencia partidista en México no refleja fracturas e identidades sociales subyacentes, sino que el grueso de los votantes está disponible para ser “capturado” por cualquiera de los competidores, en cada ciclo electoral. El sistema representativo

mexicano parece estar anclado sólo de forma superficial en experiencias vitales derivadas de la posición de los individuos en la estructura o la organización social.

El análisis que aquí se ofrece muestra que estas interpretaciones aciertan sólo parcialmente al minimizar el peso de factores sociológicos en la arena político-electoral. Los votantes mexicanos no están encapsulados en coaliciones electorales herméticas, selladas por la clase social o la identidad étnica, la religión, etcétera. Tanto el PRD como el resto de los partidos han tendido a movilizar un apoyo electoral heterogéneo. Esta clase de partidos “atrapa todo”, no dependientes de bases sociales específicas, son la norma en las democracias contemporáneas y necesarios en un sistema presidencial, que exige formar una gran coalición para ganar la presidencia. Su construcción fue además clave para restar votos al PRI como partido dominante, un proceso que para el PAN y el PRD implicó sacrificar pureza ideológica y enfatizar, hasta la elección de 2000, la división autoritarismo-democracia, por encima de otras dimensiones de competencia (Klesner 2005).

No obstante, sugiero que los patrones de reorganización social y económica en los que los mexicanos han estado inmersos en las últimas décadas sí han tenido un peso determinante sobre la estructura de la competencia política. Si bien las características demográficas de los votantes no determinan en forma automática sus preferencias electorales, la distribución social y espacial del apoyo partidista indica que el voto perredista —como el de otras fuerzas— ha estado considerablemente influido por el nuevo régimen económico. En especial, por su impacto desigual sobre distintas regiones y grupos sociales. Los candidatos, el desempeño en el gobierno y el *marketing* importan, pero las elecciones están lejos de ser simples compe-

tencias publicitarias sin anclajes sociales. Los mexicanos han tomado decisiones electorales en medio de una competencia intensa, sin fuertes lealtades partidistas e influidos por múltiples factores de corto plazo. Pero lo han hecho sobre el trasfondo de una reconfiguración económica y social que, además de sus oportunidades de vida, condiciona sus juicios y su visión sobre los rumbos deseables. La experiencia social es un fundamento indirecto, pero profundo de los alineamientos partidistas.

Finalmente, esta revisión pone de manifiesto las diferencias entre la izquierda partidista en las democracias latinoamericanas de la tercera ola y los partidos socialdemócratas de masas de las democracias europeas, forjados en el marco de la Revolución Rusa, las guerras mundiales y la Guerra Fría. Esos partidos son invocados con frecuencia por analistas como el referente para la izquierda en el mundo. No obstante, es más probable que sean una excepcionalidad regional e histórica que un modelo replicable en el “Sur Global”, al igual que los Estados fuertes que, surgidos de las guerras de movilización masiva, usaron su músculo fiscal para construir robustos sistemas de bienestar (Scheve and Stasavage 2016). Como se desprende de las secciones siguientes, las condiciones estructurales en las que partidos como el PRD han movilizado apoyo electoral contrastan con fuerza con las que históricamente enfrentaron los partidos de izquierda en las economías avanzadas.

Destaca sobre todo el hecho de que, en América Latina, la competencia electoral libre se instaló en un contexto de baja (y declinante) organización de los movimientos laborales, aunado a la menor incidencia histórica del trabajo industrial; una muy grande (y creciente) economía informal; Estados con debilidades institucionales también históricas; y fuertes restricciones impuestas por la globalización al Estado-nación, agravadas

además por las asimetrías de poder internacional. Estos contrastes han tenido implicaciones organizativas y programáticas importantes. Para la izquierda en la región, han significado organizaciones partidistas menos robustas, mayor dependencia de liderazgos caudillistas y bases sociales menos definidas por el conflicto de clase “puro” entre capital y trabajo —aunque en las últimas décadas, el apoyo de las clases más bajas a los partidos de izquierda también se ha diluido en las democracias avanzadas, en coincidencia con la intensificación de la desigualdad (Piketty 2019).²

Coordenadas del cambio social

CAMBIO DEMOGRÁFICO Y CRISIS DE ESTATALIDAD

Comencemos por el inédito escenario demográfico sobre el que se desplegó la competencia electoral durante y después de la transición democrática. Las dinámicas demográficas, como las placas tectónicas sobre las que se monta el resto de la vida social, dictan las grandes necesidades colectivas del presente y el futuro. Se sabe que la segunda mitad del siglo XX mexicano se caracterizó por un acelerado crecimiento poblacional, con el consecuente aumento de la demanda de servicios hacia las instituciones públicas —educación, salud, vivienda, etcétera. En 1980, a las puertas de la crisis de la deuda y la “década perdida” de la economía, la población era 2.6 veces más grande que treinta años antes, en 1950 (de 25.8 a 66.8 millones). Ya,

² Como muestra Piketty, la base electoral de los partidos de izquierda en países desarrollados ha tendido a migrar de las clases bajas hacia los sectores más educados, al tiempo que la riqueza se ha concentrado en lo más alto de la distribución del ingreso.

a partir de ese hecho, el país se enfrentaba a un enorme reto de integración social.

Las políticas de reducción de la fecundidad adoptadas desde los setenta disminuyeron con éxito la tasa de crecimiento demográfico. Pero aun así, la población aumentó inercialmente en 14.4 millones entre 1980 y 1990; 16.2 millones entre 1990 y 2000 (otra década de crisis económica); 14.8 millones entre 2000 y 2010, la primera década después de la alternancia democrática en la presidencia; y otros 14 millones entre 2010 y 2020. En ese fenómeno poblacional básico estaban ya inscritas varias de las presiones sociales que la política y los partidos tendrían que procesar. En números gruesos, en los treinta años de vida del PRD —treinta años definidos por el estancamiento económico (el PIB per cápita crece apenas a una tasa promedio anual de 1.18% entre 1988 y 2018, en términos reales)— se agregan a la población del país 46.5 millones de personas.

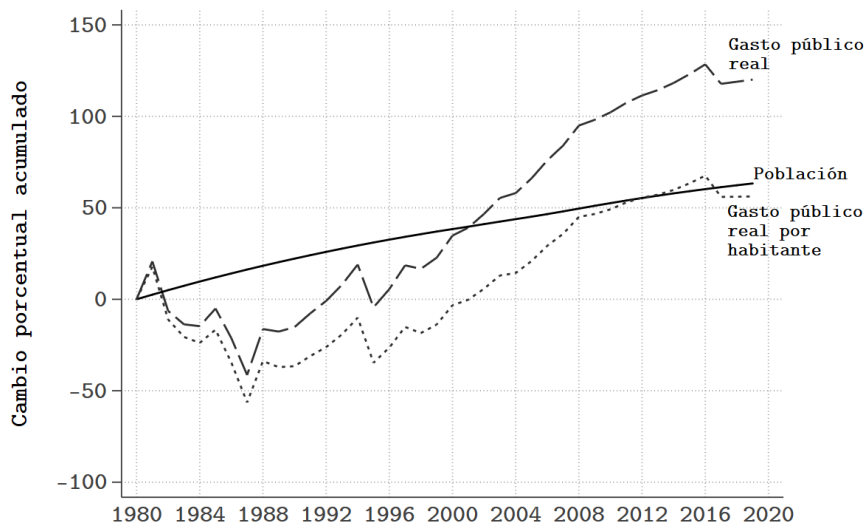
Las exigencias representativas que emanaban de la sociedad, las que el PRD contribuiría a atender, tenían en esa dinámica poblacional un determinante estructural. El régimen priista en su etapa final, y la naciente democracia mexicana, debieron administrar las demandas de una sociedad mucho más masiva que la del pasado, lo que quiere decir una sociedad necesitada de los servicios del Estado en una escala nunca antes experimentada. La ineludible demografía imponía esa realidad.

La demanda social se dispara, pero la capacidad pública de respuesta se contrae. El gran crecimiento en el número absoluto de mexicanos de las últimas décadas ocurre en un periodo en el que la economía crece muy poco —cuando crece— y en el que el Estado, presionado financieramente e impregnado del espíritu del liberalismo de mercado de la época, reduce sus ambiciones

de intervención social. Un indicador simple es suficiente para dimensionar el cambio en la presencia del Estado en la sociedad: en 1982, el gasto público representa el 42.2% del producto interno bruto. Para el año 2000, se encuentra casi en la mitad, 22.6% (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2006).

La figura 1 da cuenta de la magnitud del achicamiento y retiro del Estado, medido a través del gasto público real por habitante. En 1980, el gasto programable del gobierno federal más las participaciones a entidades y municipios se ubican en \$27,348 pesos por persona, a precios de 2018.³ Sabemos que el

**Figura 1. Crecimiento poblacional y gasto público.
Cambio porcentual acumulado a partir de 1980**



Fuente: Cálculos propios con base en la serie de gastos presupuestales del sector público del Banco de México, el índice nacional de precios al consumidor de INEGI y las estimaciones de población a mitad del año del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

³ Conforme al índice nacional de precios al consumidor de INEGI (segunda quincena de julio 2018 = 100).

Estado corporativo priista no había logrado incluir a la mayoría de la población en sus instituciones de seguridad social, salud o vivienda ni aun en esos momentos de mayor gasto. Pero a partir de entonces, tras la crisis de la deuda, las perspectivas de avance se cancelan y en cambio, la desprotección aumenta, pues el monto de gasto público por habitante se achica. En el transcurso de la década de los ochenta, el gasto de gobierno per cápita no hace sino descender de forma vertiginosa. Como se aprecia en la Figura 1, hacia fines de los ochenta éste registra una pérdida acumulada superior al 25%.

Es sobre ese trasfondo, el de un Estado que se encoje y gasta menos en una población más grande y necesitada, que se funda el PRD en 1989. Para ese año, el gasto real por habitante, en \$16,359 pesos de 2018, es 40% menor al de 1980. La crisis de 1994, además de su efecto general de empobrecimiento, vuelve a golpear el gasto público por persona. Éste empieza a recuperarse con lentitud a fines de la administración de Ernesto Zedillo, pero el hecho decisivo es que todos los ochenta y noventa son, en términos netos, de disminución de los recursos que destina el Estado por persona para financiar los derechos ciudadanos. Los niveles de gasto por habitante de principios de los ochenta vuelven a observarse sólo hasta mediados de los 2000, merced al aumento en los precios del petróleo del que gozaron los gobiernos panistas entre 2003 y 2008 (buena parte erogado en gasto corriente). Y para fines de los 2010, se encuentran otra vez estancados.

Dicho en breve, en las últimas décadas del siglo XX se suman varios millones a la población del país, justo cuando el Estado pierde capacidades de gasto y provisión social. Esta combinación profundiza desigualdades, engendra obvios malestares e inaugura una larga época en la que los individuos

deben recurrir a sustitutos privados, siempre imperfectos, para tratar de compensar la sub-provisión de bienes y servicios públicos, desde la seguridad hasta la salud. Se gesta desde entonces una crisis de estatalidad que modela el presente mexicano y, entre otras cosas, limita estructuralmente la satisfacción ciudadana con la democracia en las décadas siguientes.

¿Cómo se desahogan los malestares derivados de ese vaciamiento del Estado, que vemos reflejado en sus niveles misimos de gasto por persona? La apertura democrática permite la expresión del descontento en las urnas, además de que las libertades civiles amplían el espacio para la crítica y la protesta. Muchos mexicanos votan con los pies, cruzando la frontera norte. Pero la capacidad del sistema representativo de recoger las energías sociales dentro del nuevo marco democrático su funda, en gran medida, en la presencia del PRD dentro del menú de alternativas. Como partido contestatario, antielitista y de reivindicación de la vieja imagen del Estado posrevolucionario, ahora volcado hacia un proyecto de modernización inspirado en el libre mercado, el PRD es el principal cauce institucional para la inconformidad.

Junto con el crecimiento poblacional grueso, se suscitan otros cambios demográficos importantes, fuentes en sí mismos de varias demandas desatendidas. Uno de ellos ocurre en la estructura por edades. En 1970, la población dependiente (0 a 14 años y mayor de 64) es casi tan grande como la población en edad de trabajar (15 a 64 años), pero a partir de entonces la fuerza laboral crece en relación con los dependientes. Es decir, México empieza a convertirse en un país predominantemente joven. Para 1990, un año después de la fundación del PRD, existen 74.7 personas en edades dependientes por cada cien en edad productiva, una relación que continúa disminuyendo con

rapidez a 64.3 en 2000 y 52.8 en 2015. En 1995, en plena crisis económica, la edad mediana en el país es de sólo 21 años.

Esta estructura poblacional, aunada al aumento en el número absoluto de jóvenes —para 2015 hay 12.1 millones más de personas entre 15 y 29 años que en 1980— se traduce por definición en mayor demanda de educación superior y de empleo, necesidades que sin embargo el Estado y la economía satisfacen, de nuevo, de manera insuficiente y desigual. El “bono demográfico”, por lo general, no logra capitalizarse por la débil capacidad de absorción del mercado laboral y la baja calidad del trabajo, además de los problemas de matrícula y calidad en el sistema educativo. Y la ventana de oportunidad comienza a cerrarse, pues México se dirige hacia una nueva transición demográfica en forma acelerada. La población en edad activa, necesitada de empleos, sigue creciendo, pero también lo hace ya con rapidez la población en edades avanzadas, con las necesidades de salud, cuidado, pensiones, etcétera que ello implica. De los 16 adultos mayores (60 y más) que existían por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 años) en 1990, en 2015 la cifra sube a 38, un reflejo también de la reducción en la fecundidad.

La fricción entre el proceso demográfico y el de desarrollo económico produce además otros cambios en la ocupación del territorio, la migración y en la familia misma. Las mujeres se incorporan en grandes cantidades al mercado laboral para contribuir a la generación de ingresos familiares, trabajo que típicamente se agrega al del hogar. Como estructura organizacional, la familia se vuelve más compleja, menos tradicional, no sólo por cambios culturales —de suyo notables— sino por la necesidad económica, el aumento de la población en edad avanzada y la frecuencia con que se comparte la vivienda con parientes u otras personas, así como la alta migración (Welti

Chanes 2015). Así, aumentan los hogares monoparentales y los encabezados por mujeres, estos últimos de 17.3% en 1990, a 29% en 2015. Para 2017, el hogar biparental tradicional corresponde ya solamente al 53.8% del total de hogares en el país.⁴

La arena electoral no es ajena a estas transformaciones subyacentes, que cambian el rostro de la sociedad mexicana en el mismo periodo en que la política se democratiza. Si nos adentramos en la geografía electoral y sociodemográfica de manera simultánea, surgen algunos patrones reveladores. La figura 2 muestra la relación entre el porcentaje de hogares con jefatura femenina en los municipios del país en 2010, en el eje horizontal, y el porcentaje de votos obtenido por los candidatos presidenciales en la elección de 2012, en el vertical.

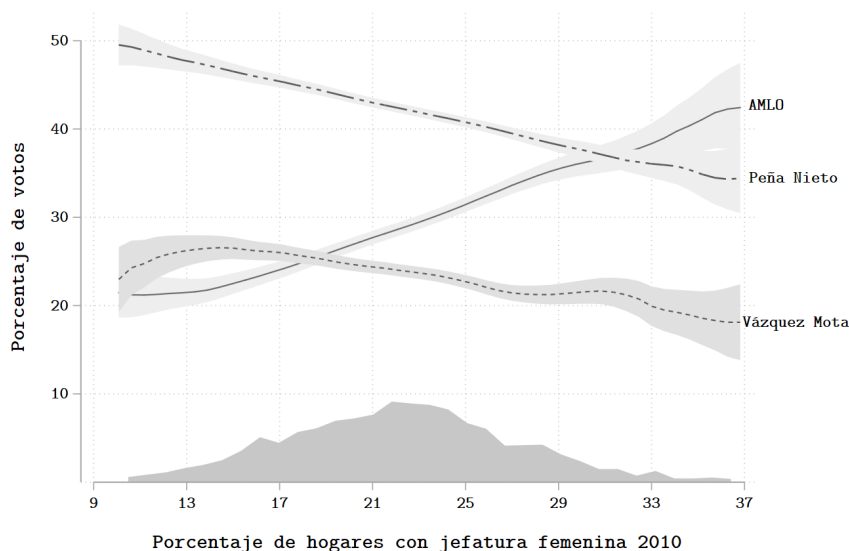
Como puede verse, el desempeño electoral del PRD es superior, en promedio, en municipios con mayor proporción de hogares encabezados por mujeres, una relación fuerte que existe también para las elecciones presidenciales de 2000 y 2006.⁵ El apoyo por el PRD ronda el 40% en los municipios con mayores índices de jefatura femenina de los hogares, contra un 20% en los de menor. Esta relación se mantiene positiva después de tomar en cuenta otras diferencias existentes entre los municipios, como los niveles de escolaridad, pobreza y desarrollo económico, acceso a la salud o de población rural.

Es importante hacer dos precisiones en este punto. Primero, a pesar de ser robusta, la correlación mostrada en la gráfica no implica que la estructura del hogar sea una causa del respaldo por el PRD. Varios factores pueden estar interactuando en

⁴ INEGI, Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

⁵ Para 2018, el voto de Andrés Manuel López Obrador en los municipios aumenta también con el porcentaje de hogares con jefatura femenina.

Figura 2. Hogares con jefatura femenina y voto presidencial en 2012, a nivel municipal



Nota: Polinomios locales con intervalos de confianza de 95%. Datos de 2,444 municipios con información disponible. El histograma de densidad al pie de la gráfica muestra la distribución de municipios a diferentes porcentajes de hogares encabezados por mujeres.

forma simultánea con ambas variables, generando esta asociación. Segundo, tampoco es posible sacar conclusiones sobre el comportamiento electoral individual con base en este patrón observado a nivel municipal. Sería una “falacia ecológica”, por ejemplo, inferir que las mujeres tendieron a votar por el PRD en mayor proporción que los hombres a partir la relación observada. De hecho, las encuestas a nivel individual muestran que tanto en 2000, 2006 y 2012, los candidatos presidenciales del PRD reciben menor apoyo electoral de las mujeres que de los hombres (Díaz-Domínguez and Moreno 2015, 232-33; Greene and Sánchez-Talanquer 2018, apéndice en línea). Como en otros países, las mujeres en México han sido menos propensas a votar por la izquierda (Klesner 2009).

Sin embargo, este patrón sí es sugerente del tipo de ecosistema social en el que se reproduce el voto perredista. En la medida en la que el porcentaje de hogares liderados por mujeres perfila un contexto social específico —de mayor vulnerabilidad económica, transformaciones familiares agudas y también de mayor liberación de las mujeres de las jerarquías patriarcales— su relación con el apoyo del PRD es indicativo de los distintos segmentos sociales a los que apelan diferentes partidos, es decir, de la heterogeneidad real en las experiencias e intereses que articulan. Así, el mensaje del PRD ha encontrado menos resonancia en el tipo de sociedad local donde por diversos factores, la familia tradicional, el hogar encabezado por los hombres, ha perdido poco terreno.

En múltiples regiones y municipios del país, sin embargo, esta continuidad está lejos de reflejar la realidad. Diversos factores han generado un aumento considerable en la proporción de hogares en los que las mujeres asumen las responsabilidades de sustento y dirección económica, además de cuidado y trabajo doméstico. Las fuerzas detrás de este fenómeno van desde la migración económica y el ausentismo de los padres varones por la criminalidad o la erosión de normas de corresponsabilidad, hasta el ejercicio más frecuente de derechos a la maternidad autónoma, al divorcio o a vivir en soltería. En cualquier caso, hablamos de procesos de desintegración, recomposición y redefinición de papeles en el hogar y la familia, esas organizaciones donde se concretan las relaciones humanas más básicas.

La gráfica 1 muestra que el PRD es un partido más exitoso en esos entornos, caracterizados por un cambio más abrupto en la estructura familiar, mayor autonomía femenina y el surgimiento de nuevas dinámicas en los hogares. Se trata de una muestra tangible de las raíces de ese partido en las nuevas formas de la

sociedad. Desde su origen, ha sido un vehículo de expresión y representación política más preferido donde la sociedad ha tenido que adaptarse a nuevas estrategias de supervivencia y organización desde su base misma, las unidades domésticas.

TERRITORIO, SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVIMIENTOS URBANOS
Pasemos a una segunda gran dimensión del cambio social, que si bien está asociada al choque de fin de siglo entre la dinámica demográfica y las posibilidades del Estado y la economía, merece su propio apartado. Me refiero a las políticas de regulación del territorio, la urbanización y sus implicaciones para la provisión de servicios en los asentamientos humanos. De nuevo, el PRD condensa políticamente varias demandas sociales que surgen de las transformaciones en estas esferas.

En 1970, 41% de la población vive en pequeñas localidades rurales de menos de 2,500 habitantes. Las ciudades de más de cien mil habitantes concentran, en conjunto, a 11.2 millones de personas. Dos décadas después, en el momento de la fundación del PRD y con la contracción económica-estatal de los ochenta a costas, la población rural ha caído en alrededor de 13 puntos porcentuales; y en las ciudades de más de cien mil habitantes, viven ya más del triple de personas, 36 millones. De esa realidad se desprenden retos de gobierno, ordenamiento y provisión pública que el Estado afronta, como ya vimos, con recursos menguantes.

Los siguientes treinta años, ya con el PRD en el universo político, son de profundización de esta tendencia demográfica. El origen de ello está en la transformación de la estructura productiva, desigualdades regionales en el crecimiento, el impacto de la apertura comercial en el campo mexicano y las reformas

al ejido, cuyas implicaciones son mucho más que agrícolas. El punto es que estos factores interactúan para producir grandes migraciones internas, además de la expulsión hacia el exterior —en 1980, en Estados Unidos hay 2.2 millones de inmigrantes nacidos en México; 4.3 en 1990; 9.4 en 2000; 12.8 en 2007, el pico; 11.7 en 2014) (Pew Research Center 2015). Así, para 2015, 56.2 millones de personas, 47% del total, viven en ciudades de más de cien mil habitantes, contra el 33.4% de 1990.

Las reformas liberales en el campo merecen resaltarse no sólo por su efecto demográfico, sino porque transforman el arreglo institucional del ejido mediante el cual el Estado mexicano había establecido el control sobre el territorio en el siglo XX. Ese arreglo mantenía a la población atada a sus localidades ante el riesgo de perder derechos sobre la tierra, además de que mantenía una estructura burocrática de control vertical sobre la población rural, que tenía en la base a los comisarios ejidales y los delegados agrarios. Como unidades territoriales con personalidad jurídica propia, representantes y un conjunto de facultades, los ejidos eran la institución de vinculación entre muchos ciudadanos y el Estado, además de un sitio importante de regulación del acceso a servicios públicos, solución de conflictos, etcétera. Más que una simple modalidad de producción agrícola, el ejido era un instrumento de gobierno.

La reforma agraria de 1992 transforma este arreglo de raíz (de Janvry, Gordillo, and Sadoulet 1997). El reconocimiento de derechos de propiedad individual sobre la tierra, mediante la emisión de certificados parcelarios individuales en los ejidos, y la flexibilización legal para impulsar un mercado de tierra autoregulado no producen la desaparición del régimen de propiedad social, ni el tránsito masivo hacia el “dominio pleno” en el régimen de propiedad privada esperado por varios impulsores

de la reforma. A la fecha, ejidos y comunidades, la propiedad social, abarca 51% del territorio nacional; 52% de la población rural en 2010 vivía en ejidos y comunidades.⁶

Pero si la universalización del régimen de propiedad privada sobre la tierra no se materializa, la reforma agraria de los noventa tiene otras consecuencias importantes. De la mano con el debilitamiento del aparato corporativo rural que la acompaña, conduce a un reblandecimiento del control gubernamental sobre el territorio —de la presencia del Estado, que dependía de las intermediaciones construidas alrededor de instituciones como el ejido, las asociaciones, ligas, federaciones y demás vasos capilares enlazados con el partido oficial. Debilitados esos brazos, el Estado pierde alcance y capacidad.

Con las reformas al régimen territorial se producen también grandes flujos demográficos. La certificación individual de parcelas expande el ámbito de actuación del mercado hacia la tierra en propiedad social —antes legalmente impermeabilizada de la oferta y la demanda, si bien sujeta a un mercado informal— y permite la migración, sin el riesgo de antes de perder la posesión. Los hogares que reciben un certificado parcelario en los ejidos entre 1993 y 2006 tienen un 28% más de probabilidad de migración de alguno de sus integrantes (de Janvry et al. 2015)we find that households obtaining certificates were subsequently 28 percent more likely to have a migrant member. We also show that even though land certification induced migration, it had little effect on cultivated area due to consolidation of farm units. (JEL O13, O17, P14, Q15, Q18, Q24, Q28. Al mismo tiempo, el sector agrícola experimenta la

⁶ Cálculos propios con base en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional.

apertura comercial y la pérdida de capacidades materiales y de gestión de la estructura agraria. En consecuencia, se dispara el desplazamiento interno y hacia Estados Unidos, sobre todo de población joven. Se eleva la edad promedio de los habitantes del campo, convirtiendo la brecha urbano-rural también una brecha generacional.

Estas transformaciones en la propiedad agraria tienen también implicaciones electorales. La dotación de derechos de propiedad individual, vía la emisión de certificados, favorece al PAN como partido promercado identificado con la defensa de la propiedad (de Janvry, Gonzalez-Navarro, and Sadoulet 2014) we use the 14-year nationwide rollout of Mexico's land certification program (Procede. Este efecto se observa, sobre todo, en ejidos cercanos a ciudades y en zonas de cultivo de productos con potencial de exportación, como frutas y verduras, en contraste con cultivos como maíz o frijol. El programa de certificación individual, por tanto, tiene el efecto de orientar el voto hacia el PAN en las localidades donde las ganancias potenciales del mercado de la tierra son mayores.

Sin embargo, el PAN sigue siendo un partido de esencia urbana y clases medias-altas educadas y prósperas. En zonas ejidales de otras características, en especial en el centro y sur del país, la merma en el apoyo por el PRI la capitaliza el PRD. Los ejidos más pobres, así como donde la tierra sigue sin ser formalmente parcelada, se mantienen como bastiones priistas. Son los resabios del potente “voto verde” en el campo, movilizado en primer lugar por la Confederación Nacional Campesina (CNC). Durante y después de la “transición dual” al mercado y la democracia, las viejas coaliciones rurales del PRI son las más resistentes y permiten al partido mantenerse como un actor competitivo mientras sus vínculos urbanos se resquebrajan (Gibson 1997).

Aun así, la reivindicación del nacionalismo revolucionario por parte del PRD, en paralelo con el debilitamiento de la maquinaria corporativa en el territorio, le permiten a este partido atraer el voto de sectores rurales descontentos, además de algunos movimientos campesinos disidentes que habían roto ya con el priismo. De hecho, si analizamos el voto promedio obtenido por los candidatos presidenciales priistas entre 1994 y 2018 en los municipios del país, éste no responde al porcentaje de ejidatarios dentro de ellos —con la excepción mencionada de las zonas donde la expedición de certificados individuales es baja. En cambio, conforme mayor es la proporción de la población municipal con derechos ejidales, mayor tiende a ser también el voto promedio por los candidatos de la izquierda en ese período. La relación se mantiene incluso después de separarla de otros factores que pudieran explicar ambas variables, lo que sugiere que el PRD logró movilizar apoyo en zonas rurales o semirurales antes dominadas por el PRI (Sánchez Talanquer 2019).

Esto no habla sólo, o necesariamente, del comportamiento de los ejidatarios. Podría ser la población no ejidataria, en los municipios donde la propiedad ejidal está extendida, la que tiende a favorecer al PRD, por razones relacionadas con la posesión de la tierra u otras. Debido a la restrictiva regulación sobre la herencia y transmisión de derechos ejidales, existe un grupo amplio de población en el país que si bien reside en territorio ejidal, tiene acceso limitado o inseguro a la tierra, además de que carece de voto en las decisiones comunales. En la actualidad, los ejidatarios registrados con plenos derechos ascienden a 2.9 millones de personas (75% hombres), dueños de la mitad del territorio del país. Así, el gran proyecto igualador del siglo XX, la reforma agraria, se ha convertido en un factor de desigualdad entre la población rural. Pero más allá de estas preci-

siones, el punto para destacar es que los complejos procesos de cambio y redistribución del poder en el campo mexicano tuvieron, además de sus consecuencias migratorias, desahogo electoral, gracias a un sistema de partidos en el que una alternativa disponible, el PRD, apelaba frontalmente a intereses trastocados por la disolución del orden posrevolucionario en el territorio.

Fuera del ámbito rural, el PRD también cobija políticamente el cambio —o desgarramiento— social. La expulsión poblacional provocada por las reformas económicas, las transformaciones del ejido y otros factores confluyen con el crecimiento demográfico para crear hacia fines del siglo XX una sociedad mexicana más joven, móvil y urbana. Todo, además, en medio de un mediocre desempeño económico nacional. Cambia el tamaño y la fisonomía de las ciudades, el uso del espacio público, la escala de los asentamientos irregulares y el comercio informal, la magnitud de los problemas urbanos. En las aglomeraciones metropolitanas modernas se multiplican así los retos de integración social y provisión pública, en los que el PRD encontraría muchas de sus razones de existir.

Está bien documentada la importancia de los movimientos populares urbanos en la fundación del partido, en especial en la Ciudad de México (Bruhn 1997; Combes 2011). Tras el terremoto de 1985, las fuertes restricciones financieras del gobierno producen una respuesta gubernamental muy insuficiente. Pero más allá de los problemas presupuestales, esa coyuntura resalta la deficiente gestión pública de los problemas de la capital del país, donde los habitantes carecen además del voto para las autoridades locales, siquiera para ejercer cierta presión. En otras zonas del país, el descontento con el régimen priista empezaba ya a manifestarse en contiendas electorales locales, que si bien carecían de condiciones democráticas mínimas, servían al régi-

men para tomar el pulso a la sociedad y a la oposición, como foco de organización. En la Ciudad de México, esa compuerta estaba cerrada.

Sin contiendas locales, los movimientos populares de la capital se articulan con la Corriente Democrática escindida del PRI para la conquista del poder presidencial, primero en respaldo de la candidatura de Cárdenas por el Frente Democrático Nacional en 1988 y luego bajo el paraguas del PRD, a partir de 1989. Dos ejemplos destacados son la Unión Popular Nueva Tenochtitlán y la Asamblea de Barrios, la columna vertebral del partido y una de las bases organizativas de la larga hegemonía política de la izquierda sobre la capital del país. Con el paso del tiempo, a partir del acceso a los aparatos estatales, estos movimientos se burocratizan y hacen uso extensivo de estrategias clientelares de intermediación. Caen, también, en la franca corrupción. Pero pese a estos desarrollos ulteriores, tienen su origen y razón de ser en la existencia de necesidades sociales políticamente desatendidas que el PRD encarna en la arena electoral.

Vemos en este punto, con plena claridad, la función desempeñada por el PRD como bisagra entre nuevos movimientos sociales de origen popular y la esfera institucional. El PRI-Estado, siempre más débil en las zonas urbanas y atado por la austeridad y la crisis, era incapaz de absorber estos nuevos brotes sociales bajo su aparato corporativo, en declive por las condiciones económicas y los ideales de su nueva dirigencia tecnocrática. Tampoco podía hacerlo el PAN, un partido de católicos, norteros prósperos y gente de buenas costumbres, ajeno a las carencias y preocupaciones plebeyas del capitalino promedio. Pero esos nuevos sujetos sociales —distintos de la vieja pobreza rural, sobre la que el PRI mantenía su dominancia—, esa clase media

baja precaria, determinada por la demografía y el mercado, se formaba ya de millones de mexicanos, y necesitaba una salida en la arena política. Su voz representativa fue el PRD.

Estos alineamientos se manifiestan sin otras distracciones en la polarizada elección de 2006. Dos cosas importantes han cambiado para entonces. Primero, se ha conseguido la estabilidad macroeconómica después de los turbulentos ochenta y noventa, cuando las preocupaciones inflacionarias dominan el voto económico y favorecen a los partidos de centroderecha. Segundo, la división democracia-autoritarismo ha quedado atrás con la alternancia en la presidencia, permitiendo la consolidación del modelo económico como eje dominante de la competencia política. Así, la elección de 2006 permite asomarse a las bases sociales subyacentes al sistema de partidos.

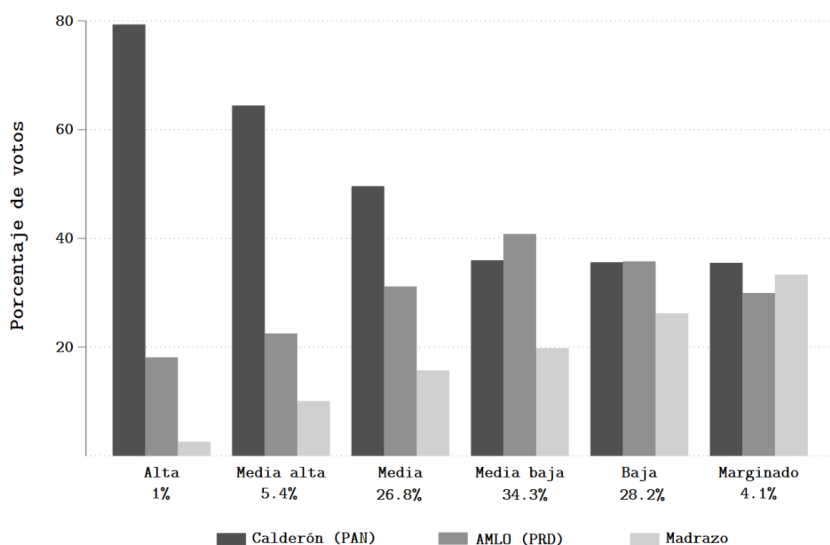
La figura 3 muestra el voto reportado en una encuesta poselectoral en 2006 según la clase social del entrevistado.⁷ Como puede verse, el PAN domina por amplio margen entre las clases alta y media alta, e incluso entre aquellos identificados como de clase media. Su voto desciende con rapidez con la clase social, aunque se estabiliza en la parte baja de la distribución. La ampliación del programa Oportunidades de lucha contra la pobreza da al PAN un porcentaje importante del voto más pobre (Díaz Cayeros, Estevez, and Magaloni 2016). El PRI, relegado en estos comicios a un lejano tercer lugar, experimenta un patrón contrario, con incrementos en el voto conforme se desciende en

⁷ La clase social del encuestado fue codificada por el entrevistador al final del cuestionario con base en la experiencia durante las entrevistas y las características observadas: “Por lo que usted vio, ¿a cuál clase social diría que pertenece el entrevistado?” El voto se codificó con base en la pregunta: “Para propósitos de esta encuesta, le voy a dar un papel donde usted puede marcar cómo votó en las elecciones presidenciales, sin que yo lo vea, y después deposítelo en esta mochila. ¿Por quién votó usted para Presidente de la República?”

la escala social. No obstante, su voto entre las clases medias y altas es tan bajo en esta elección que el partido es competitivo solamente entre los más marginados, en zonas rurales.⁸

La figura también nos muestra la estructura del voto perredista: más estable entre las distintas clases, pero mayor entre la clase media baja que en cualquiera de las otras.⁹ El PRD moviliza en esta elección de manera masiva a su electorado de las zonas metropolitanas, en especial de la Ciudad de México, donde la gestión de López Obrador había enfocado sus esfuerzos

Figura 3. Clase social y voto en las elecciones presidenciales de 2006



Nota: Cálculos con base en la encuesta representativa nacional, cara a cara, levantada como parte del estudio electoral de panel México 2006, ronda tres (Lawson et al 2007).

⁸ El patrón es distinto en las elecciones de 1994 y 2012, en las que el PRI moviliza alto apoyo electoral en todas las clases, como se verá más adelante.

⁹ En 2012 y sobre todo 2018, el voto lopezobradorista es más robusto entre sectores más acomodados materialmente y de más alta educación, en comparación con 2006.

justamente en esa población urbana en la precaria medianía. El programa de transferencias universales a los adultos mayores es el ejemplo más notable.

Esa medianía precaria era la que se había expandido en las décadas previas, en los márgenes de los bloques sociales tradicionales incorporados en los sectores del PRI. Las inseguridades de estas nuevas colectividades tenían que ver con la baja calidad del trabajo, la competencia por servicios públicos escasos, las deficiencias de las infraestructuras urbanas, las secuelas de las crisis económicas. No se trataba, insisto, de los más pobres entre los pobres, habitantes como hasta hoy de remotas y muy pequeñas localidades rurales. Pese a la desordenada urbanización recién descrita, una muy alta dispersión de la población rural en pequeños asentamientos sigue siendo uno de los rasgos demográficos del país, como consecuencia, entre otros factores, de la historia del reparto agrario. El censo de 2010 registra más de 173 mil localidades (90% del total) con menos de 500 habitantes.

En contraste con ese “viejo México”, los grupos urbanos que respaldan al PRD tienen en promedio un nivel educativo más alto, ciertas comodidades, mayor exposición a la globalización y mayor acceso a bienes de consumo que el habitante típico de los enclaves de pobreza rural. No obstante, viven una vida insegura por la insuficiencia en los ingresos y la ausencia de una red pública de protección social, sustituida sólo de manera imperfecta por lazos familiares y malos servicios privados. Al momento de la fundación del partido, en 1989, las instituciones y programas de bienestar existentes habían sido creadas en otra época, para otra sociedad, y se dirigían a las bases del régimen priista agrupadas en las corporaciones, ahora menguantes.

El PRI, por supuesto, respondió al desafío con esfuerzos de adaptación organizativa, cuyo propósito era mantener la dominancia pese a los flujos en la organización social. Programas como “Solidaridad” durante el salinismo, por ejemplo, buscaron dar al partido-Estado una nueva estructura conforme a criterios territoriales, en detrimento de los criterios corporativos. El Estado llegaría al ciudadano esquivando las costosas intermediaciones del pasado, mediante políticas enfocadas. Incluso el clientelismo debía ser eficiente.

Sin embargo, estas ambiciones tenían el límite duro de la escasez de recursos públicos. Las nuevas políticas sociales, enfocadas en el individuo, difícilmente podían suplir las inversiones necesarias en infraestructura urbana, salud, vivienda, transporte, etcétera. Con ello, segmentos crecientes de la población experimentaban el vacío estatal en las instituciones de bienestar. A esa clase media-baja vulnerable que padece, por ejemplo, las inequidades en el abastecimiento de agua en la Ciudad México, la saturación del transporte, el gasto catastrófico en salud o la escasez de la vivienda, el PRD le otorga representación política —y servicios de gestión de acceso al Estado, que no alcanza para todos.

El problema de la vivienda urbana es, de hecho, uno de los motivos fundacionales del partido y de sus movimientos populares, varios de ellos con raíces en la organización vecinal tras el terremoto de 1985. Pero no es un problema pasajero. Según la encuesta intercensal de 2015, por ejemplo, 28.4% de la población del país vive con algún nivel de hacinamiento. Este tipo de carencias en la vivienda, una manifestación de las desigualdades sociales, configuran el apoyo territorial por los distintos partidos mucho más allá de la etapa formativa del PRD.

La Figura 3 muestra la relación entre el porcentaje de personas en los municipios con carencia por calidad y espacios en

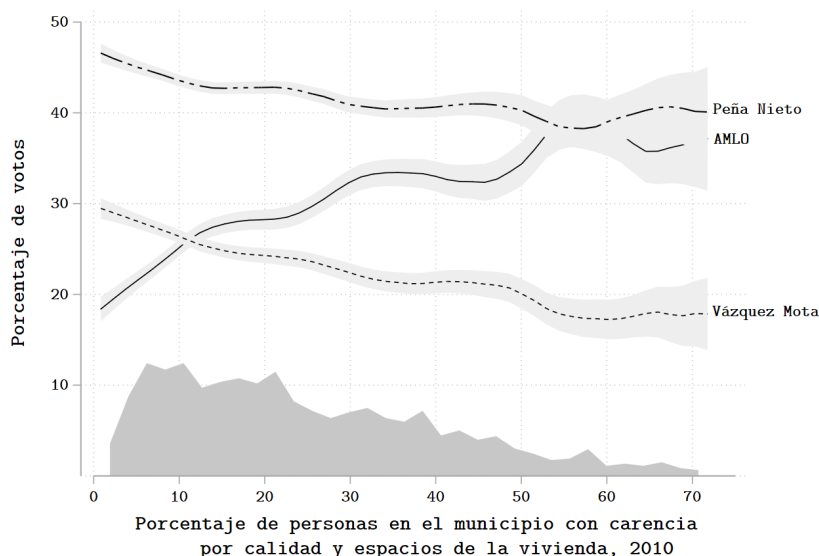
la vivienda, por un lado, y el porcentaje de votos obtenido por los tres principales candidatos presidenciales en 2012, por el otro. La elección de 2012 es relativamente excepcional en que el PRI consigue niveles relativamente altos de apoyo fuera de su electorado tradicional —la población rural, más pobre, de mayor edad y de baja educación (Moreno 2018). Su candidato, Enrique Peña Nieto, se consolida como la opción anti-Andrés Manuel López Obrador y atrae el voto de buena parte del voto panista, más próspero y urbano. Así, en la gráfica observamos que el PRI obtiene porcentajes de voto similares en municipios muy distintos en cuanto a la prevalencia de carencia por calidad y espacio en la vivienda.¹⁰

No obstante, es claro también que el apoyo por el PRD aumenta con el porcentaje de la población municipal que enfrenta esta carencia, común en zonas de marginación rural pero también en municipios populosos de clase media y baja. El candidato presidencial del PRD en 2012 obtiene sólo un 20% del voto en promedio en municipios prósperos donde no existe carencia por vivienda. Ahí, en esos municipios homogéneos en los que la gran mayoría o toda la población vive de manera cómoda, el PAN encuentra su mejor desempeño. En cambio, donde la mitad de la población municipal sufre esta condición, el apoyo promedio por el PRD en esta elección alcanza el 35%.

El patrón para estos partidos en las elecciones de 1994, 2000 y 2006 es consistente: el PRD aumenta su votación conforme sube el porcentaje de población municipal que habita viviendas con algún grado de precariedad, mientras su apoyo es menor en los municipios más aventajados. El PAN, a la inversa. Estas

¹⁰ Un patrón similar se observa en la elección de 1994. En 2000, 2006 y 2018, en cambio, el PRI tiene un mejor desempeño conforme aumenta la población con carencia por vivienda en los municipios.

Figura 4. Carencia por vivienda y voto presidencial en 2012, a nivel municipal



Nota: Polinomios locales con intervalos de confianza de 95%. Datos de 2,444 municipios con información disponible. El histograma de densidad al pie de la gráfica muestra la distribución de municipios a diferentes porcentajes de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.

relaciones se mantienen estadísticamente significativas cuando en modelos estadísticos, consideramos de manera simultánea otras diferencias entre los municipios, como sus características geográficas, la proporción de población en pobreza alimentaria, el nivel promedio de educación o desarrollo o el tamaño de las localidades dentro de sus fronteras.

Las mismas precauciones mencionadas arriba deben adoptarse en la interpretación de estas tendencias agregadas. No es posible derivar, a partir de estas correlaciones, conclusiones sobre el comportamiento electoral de individuos con determinadas carencias, ni existe necesariamente una relación causal. Pero como antes, el patrón observado sí habla del tipo de en-

torno social en el que se reproduce el apoyo por el PRD: zonas mixtas, desiguales, donde no se concentran necesaria o exclusivamente las personas de más bajos recursos o más bajo nivel educativo —quienes se inclinan tradicionalmente por el PRI y, con el PAN en poder, responden a programas sociales como Oportunidades y Seguro Popular (Díaz Cayeros, Estevez, and Magaloni 2016)—, pero donde una proporción importante de la población local sí enfrenta inseguridades económicas, derechos sociales restringidos, carencias como la de vivienda digna que corroen la calidad de vida.

En el resquebrajamiento del orden territorial y los problemas de la vida urbana vemos, de nuevo, un Estado rebasado. La inspección de estas geografías nos muestra que las vulnerabilidades sociales encuentran reflejo en el mapa partidista. Aun si consideramos la desigualdad social un condicionante “distante” de la política electoral, ella delinea los grandes parámetros de un sistema representativo en el que el PRD, con su oposición férrea e ingobernable, da forma política a las carencias propias de la época.

LIBERALISMO DE MERCADO Y DESARTICULACIÓN SOCIAL

El último pero más abarcante factor de cambio social a considerar es el tránsito hacia un modelo de desarrollo económico fundado en la extensión de incentivos de mercado. Las secciones previas han hecho ya referencias a ello, pero el vínculo del PRD con este viraje —global, por lo demás— es tan estrecho, y sus consecuencias para la sociedad mexicana tan vastas, que requiere analizarse con detenimiento. La resistencia a la instauración del liberalismo de mercado como principio rector de la organización económica es el conflicto constitutivo del partido

y, sugiero, su principal aportación a la estabilización de la democracia representativa.

México fue uno de los líderes regionales en el proceso de ajuste estructural y liberalización económica que recorrió América Latina en los ochenta, tras la crisis de la deuda.¹¹ La crisis, en la interpretación dominante, era la consecuencia final del agotamiento del modelo estatista de desarrollo, basado en la sustitución de importaciones como motor de la industrialización y el crecimiento. El proteccionismo y la intervención estatal eran fuentes de graves ineficiencias económicas, cuyo antídoto sería la operación del mercado autoregulado en más y más esferas.

Los instrumentos fundamentales de la nueva estrategia de desarrollo son bastante conocidos. Con pocos matices, constituyen la política económica de México hasta hoy. Entre los principales se encuentran una política fiscal restrictiva, es decir, austeridad gubernamental y aversión al déficit; libre flujo de capitales y fomento de la inversión extranjera; apertura comercial; contención salarial y explotación de la mano de obra barata como ventaja comparativa; contención monetaria, para mantener bajos niveles de inflación y atraer capital con altas tasas de interés; privatización de empresas públicas; y general, no interferencia del Estado con los precios.

Todas estas herramientas derivan de las ideas económicas liberales que, envueltas en prestigio científico, se tornan dominantes en el mundo desde fines de los setenta. En México, como en el resto de América Latina, son asimiladas por las restricciones internacionales, el fin de las alternativas y el estrecho margen de maniobra legado por las crisis (Kaplan 2013).

¹¹ Chile es el caso pionero, con reformas económicas desde los setenta.

Influye también la convicción ideológica de una nueva élite dirigente socializada en el exterior, de mentalidad tecnocrática y espíritu modernizador (Centeno 1994).

No pretendo resumir esta “gran transformación” —a la Polanyi— hacia la sociedad de mercado, que además de sellar el rumbo del país, ha ordenado su conflicto político ya por décadas. Resalto sólo tres fracturas que su avance produjo en la sociedad: la precarización del empleo y la expansión de la economía informal; la desarticulación de formas de sociabilidad y solidaridad ancladas en el modelo estatista de desarrollo; y la profundización de desigualdades regionales, como resultado de una inserción muy dispar de los estados del país en el sistema de mercado y tasas mediocres de crecimiento a nivel nacional durante el largo periodo desde la transición económica (Ros 2013). El PRD sirvió para expresar los dolores asociados con cada una de estas rupturas sociales, conjurando así un escenario en el que a las exclusiones de la economía, se añadiera la alienación política.

TRABAJO E INFORMALIDAD

Primero, el trabajo. Los años de gestación y expansión del PRD son de cambio drástico en la situación laboral. La convergencia de varios de los factores discutidos —el crecimiento de la población en edad de trabajar, la urbanización, las crisis económicas y la estrategia de contención de costos laborales, para atraer inversión— redunda en escasez de empleo bien remunerado y expansión de la informalidad. La oferta de trabajo rebasa con mucho las capacidades de generación de empleo de la economía, sobre todo de empleo de buena calidad.

Bastan algunos indicadores para dar cuenta del fenómeno. En la década que antecede a la elección de 1988, el salario mí-

nimo real pierde más de la mitad de su valor real. La caída continúa hasta la segunda mitad de la crisis de los noventa, cuando se estabiliza en menos de una tercera parte de su valor de fines de los setenta. La crisis de 1994-1995 golpea también a los salarios medios en el sector formal, que más de veinte años después apenas ha recuperado su valor real previo a esa crisis.¹² Se generalizan además el autoempleo y el empleo informal, en especial en muy pequeñas unidades económicas con muy bajo capital y excluidas del crédito, que escapan también al pago de contribuciones a la seguridad social (Antón, Hernández Trillo, and Levy 2012). Proliferan los tianguis, pequeños changarros, puestos de la esquina que, entre otras cosas, reconfiguran el espacio público. Para muchos, la subsistencia la dan las propinas, no los salarios. El grueso del trabajo en la economía se realiza en la desprotección legal. Para fines de 2019, sólo 55% de los trabajadores subordinados y remunerados está protegido por un contrato escrito, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El resto vive a merced del patrón. En las dos primeras décadas de democracia en el país, 6 de cada 10 puestos de trabajo son informales.

Formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad no son mundos paralelos, desconectados entre sí. Hablamos de una sola economía, articulada de arriba abajo por el trabajo inseguro, mal pagado, precario. La imbricación es total. El trabajo informal es funcional al sector formal. Una cuarta parte de los trabajadores informales laboran en empresas registradas o instituciones públicas (Temkin and Cruz 2019). Los trabajadores formales dependen de los bienes y servicios producidos por los

¹² Cálculos con base en la serie de salario medio de cotización al IMSS y el índice de precios al consumidor de INEGI.

informales, y viceversa. Ni siquiera son grupos de población separados. Por la necesidad material y la inestabilidad del empleo, los trabajadores formales de un periodo, son los informales de otro, un problema para el moderno sistema de pensiones individualizadas, que supone largos tiempos de cotización en el sector formal —se estima que sólo 24% de los trabajadores con cuentas individuales para el retiro alcanzará la pensión mínima (CON SAR 2019).

Así que en los treinta años de vida del PRD, el empleo, el principal determinante del ingreso y la calidad de vida, es insuficiente y de mala calidad. La dualidad del mercado laboral condiciona por completo los recursos que los individuos tienen a su alcance para afrontar los riesgos y ciclos de la vida: la paternidad y maternidad, la discapacidad, la enfermedad o la vejez.

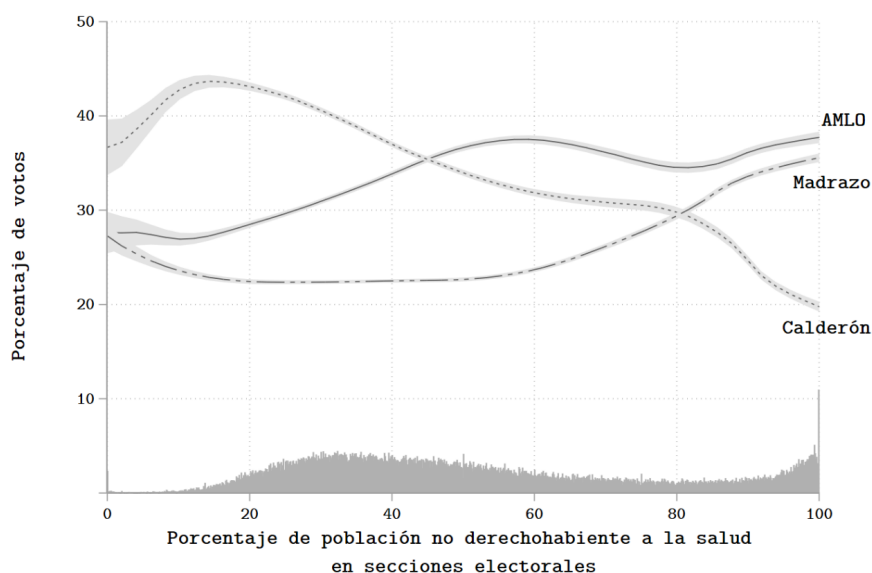
Para la década de los 2000, los gobiernos en toda América Latina adoptan programas de protección social no contributivos, dirigidos hacia el enorme sector informal. En México, surgen el Seguro Popular y las transferencias monetarias a los adultos mayores, a la par de la expansión del programa anti-pobreza Progres a/Oportunidades/Prospera. La competencia democrática es un fuerte estímulo a estas reformas de la política social, dado el entorno de informalidad en el que los partidos luchan por el voto (Garay 2016).

A la vez, ciertos patrones del mercado laboral y exclusión de las instituciones de bienestar moldean la competencia democrática. Por ejemplo, según modelos estadísticos que incluyen el género, la edad y la ocupación como características sociales básicas de los votantes, vendedores ambulantes y maestros fueron más propensos a votar por la izquierda en la elección presidencial de 2006 que los trabajadores manuales o las personas jubiladas. En 2012, ambulantes y estudiantes tuvieron más

probabilidad de respaldar a López Obrador que trabajadores agrícolas, manuales o quienes trabajaban en una oficina bajo supervisión. En ambos casos, como se mencionó antes, las mujeres respaldaron en mucho menor grado a la izquierda que los hombres.¹³

Una aproximación geográfica en vez de individual produce también resultados sugerentes. Esta vez, la disponibilidad de

Figura 5. Acceso a la salud y voto presidencial en 2006, nivel sección electoral



Nota: Polinomios locales con intervalos de confianza de 99%. Datos de 64,353 secciones electorales con información disponible. El histograma de densidad al pie de la gráfica muestra la distribución de secciones electorales a diferentes porcentajes de población sin derechohabiencia a la salud en 2005.

¹³ Modelos estadísticos realizados por el autor con base en encuestas representativas nacionales, cara a cara, levantadas como parte de los estudios electoral de panel 2006 y 2012 (Lawson et al. 2007, 2013).

datos permite descender hasta la sección electoral. La figura 5 muestra la relación simple entre el porcentaje de población en la sección que no gozaba de acceso a la salud en 2005 (a través del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Seguro Popular o seguro médico privado), y el porcentaje de votos por los tres principales candidatos presidenciales en 2006. Para entonces, el Seguro Popular daba apenas sus primeros pasos —sólo 7% de la población total estaba cubierta por este nuevo esquema, contra 41% en 2015—. 49.8% de la población carecía de acceso a la salud.

Como se ve en la figura, el candidato de la izquierda recibe en promedio menos del 30% del voto en secciones electorales con baja exclusión en salud, mientras que el candidato del PAN ronda o rebasa el 40% del voto en ese tipo de secciones. El voto del PAN, sin embargo, desciende conforme aumenta la población sin derechohabiencia, hasta que llegado el punto en el que un 45% o más de los habitantes carece de acceso a la salud, el PRD predomina. Como antes, no es posible sacar conclusiones sobre el comportamiento individual, aun a este nivel de granularidad —más de 64 mil secciones electorales—, pero es claro que a mediados de los 2000, las exclusiones e inclusiones de los sistemas de bienestar tenían repercutían en la arena electoral. Para 2012, buena parte de la población excluida ha sido ya incorporada a través del Seguro Popular y la ampliación de otros programas de transferencias, fortaleciendo a la centroderecha entre la población de bajos ingresos (Díaz Cayeros, Estevez, and Magaloni 2016).

Estos programas, sin embargo, son de menor generosidad que los sistemas tradicionales para el sector formal. Se trata de paliativos ante la incapacidad estatal de financiar e instrumentar un sistema de protección social igualitario y universal. Las po-

líticas de transferencias que se expanden bajo la democracia en América Latina tejen una red de protección más “ancha”, pues abarcan a segmentos antes excluidos de beneficio alguno; pero la red es a la vez delgadísima, pues los beneficios son mínimos.

En la actualidad, esta etapa “barata” de ampliación de la política social empieza ya a agotarse, mientras que la “salida” de las clases medias y altas de los sistemas públicos (escuelas y hospitales privados), junto con la disponibilidad de sustitutos informales para las clases bajas (clientelismo, tolerancia del ambulante y los asentamientos informales, etcétera), se interpone en el camino de la construcción de coaliciones políticas necesarias para la redistribución “dura” —grandes inversiones fiscales en vivienda asequible, seguros de desempleo, pensiones y salud y educación de buena calidad— (Holland and Schneider 2017).

MERCADO Y FORMACIÓN SOCIAL

Además del mercado laboral y la política social, la transición hacia el modelo de mercado transforma las formas de sociabilidad. El modelo de desarrollo basado en la industrialización hacia el mercado doméstico no era solo un conjunto de políticas económicas, sino una forma específica del Estado. Era, también, una forma de interpelar a la sociedad, pues a él lo acompañaba una colección de organizaciones corporativas construidas a lo largo del tiempo vía la cooptación de movimientos de base o incluso creadas desde arriba. Éstas agrupaban a las personas en función de su actividad productiva.

Es decir, el Estado posrevolucionario había constituido sus propios sujetos sociales, a partir de la posición en la producción material —campesinos, obreros, industriales, comerciantes, profesionales, etcétera. El partido oficial era el nodo central

en esta densa formación social compuesta por organizaciones verticales y segmentadas, a través de las cuales el Estado construía su legitimidad. El modelo económico era parte integral de la reproducción de la autoridad estatal, pues en torno él se habían desarrollado las agrupaciones sociales que otorgaban representación política. Así, el orden político mismo, entendido como un sistema de intercambio de obediencia por satisfacción de necesidades y demandas, estaba atado a las intervenciones económicas del Estado.

El viraje hacia el modelo de mercado tenía entonces profundas implicaciones no sólo en la esfera económica, sino también en la política y social. En la conclusión del ensayo discuto cómo esta imbricación entre el modelo económico y el orden político fue la que provocó que, abandonado el modelo estatista de desarrollo en favor del sistema de mercado, se gestaran crisis profundas de representatividad en varios países de América Latina. El PRD, al cubrir tempranamente en el sistema de partidos el espacio dejado por el corrimiento el PRI hacia el mercado, conjuró esa crisis.

No obstante, los reajustes económicos trastocaron la forma en que se organizaba la sociedad —y también su densidad asociativa misma. Con todo y sus problemas de autoritarismo interno, charrismo, supresión de la autonomía individual, etcétera, las estructuras corporativas constituían un espacio de intercambio, cooperación y convivencia social más allá de la familia. Ésta no era una sociedad civil democrática, separada del poder estatal, sino confundida con éste. Las asociaciones (cámaras, centrales, ligas, confederaciones, etcétera) servían incluso de canales de transmisión del poder hacia el cuerpo social —de ahí que su vaciamiento debilitara a tal punto el control social y territorial del Estado.

Pero al colapso de esas estructuras umbilicamente conectadas con el modelo proteccionista no siguió la formación espontánea de una nueva y robusta sociedad civil. En su lugar quedó, más bien, un desierto organizativo, sobre todo en lo inmediato. Hay por supuesto importantes excepciones. Algunos resabios corporativos quedaron en pie —el sindicato de maestros y otros sindicatos de viejas empresas públicas, por ejemplo—. El debilitamiento de la interpelación estatal según la actividad económica, vía las estructuras corporativas, habilitó también nuevos movimientos y reclamos en otras dimensiones de identidad, como el zapatismo o las asociaciones urbanas ya discutidas.

Pese a esas excepciones, el correlato del modelo económico de mercado fue una sociedad más individualizada, “líquida”, con vínculos organizativos y redes de solidaridad menos extensas y duraderas. La sociedad se replegó a la esfera privada. Entre la inseguridad económica y el debilitamiento de las corporaciones por el retiro del apoyo estatal, los ciudadanos contaban con pocos recursos y oportunidades para actuar colectivamente, sobre todo los más perjudicados. A nivel organizativo, los viejos interlocutores y espacios de interacción habían perdido su relevancia. A nivel individual, solventar el costo de la vida y las dificultades diarias dejaba poco margen para la acción conjunta. De tal manera que los mismos procesos de ajuste que acentuaban la desigualdad erosionaban la capacidad de politizarla (Roberts 2002).

A esos obstáculos hay que sumar la difusión de la nueva normatividad del sistema de mercado. Después de todo, la política pública concebía ahora individuos racionales —no bloques ni corporaciones— haciendo cálculos costo-beneficio y persiguiendo su propio interés. La competencia entre agentes autointeresados era no sólo la forma más “natural” de interacción, sino

que producía resultados socialmente óptimos. De ella surgía, a la Smith, la “riqueza de las naciones”.¹⁴ La expansión del mercado invocaba una cierta antropología, la del *homo economicus*. Al reorganizar al Estado en torno a él, contribuía a crearlo.

El ámbito laboral es otra vez elocuente. La tasa de sindicalización disminuye entre fines de la década de los setenta y principios de los noventa, de más de 16% a 10.4% de la población económicamente activa (Bensusán and Middlebrook 2013, 53-54). Pese al crecimiento de la mano de obra industrial, también descende la parte sindicalizada de los trabajadores industriales. En su momento cumbre, se estima que la sindicalización había alcanzado un 32% (Roberts 2002, 15). Para 2012, se sitúa en 8.8%.

La representación laboral también descende en los órganos legislativos. En 1982, 24% de los diputados federales provienen de ese sector. Para 2009, en el veinte aniversario del PRD, el porcentaje es sólo 7.2%, y la mitad de ellos corresponden al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Bensusán and Middlebrook 2013, 68). Además, bajo el nuevo modelo de desarrollo, las autoridades echan mano de recursos políticos y jurídicos para disuadir la movilización de trabajadores, pues los bajos salarios y la “paz laboral” son empleados como fundamentos de la competitividad mexicana en la globalización. No es casual que detener el “dumping social” es la exigencia central contra México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), veinticinco años después (Flores-Macías and Sánchez-Talanquer 2019).

¹⁴ El liberalismo económico de la época reivindicó este componente del pensamiento de Smith (el Smith de *La riqueza de las naciones*), pero tendió a obliterar las ideas del propio Smith acerca de la necesidad de un sistema moral que regulara a la sociedad de mercado (el Smith de *La teoría de los sentimientos morales*).

Así que el trabajo tiende a desvanecerse, no como realidad económica pero sí como fuerza política y sitio de organización social. Las posiciones de clase son más ambiguas en el enorme y atomizado sector informal, en el que reina además una intensa competencia. Aunque los individuos experimenten desafíos similares en su vida productiva, la fluidez de la estructura social dificulta la institucionalización de organizaciones colectivas. El aislamiento y la movilidad son barreras a la solidaridad.

Si en Europa occidental la expansión capitalista produjo una nueva clase, el proletariado industrial, que sirvió de base social a partidos socialdemócratas en la competencia democrática, aquí la izquierda se abrió paso en la arena electoral precisamente cuando los cambios en el capitalismo desarticulaban esa clase, sin que ésta hubiera alcanzado la densidad de los países avanzados. Los partidos resultantes reflejaron esta formación social subyacente. En palabras de Therborn, los sujetos del conflicto de clase en el siglo XXI son las clases medias enojadas y los “plebeyos”, no el proletariado (Therborn 2012).

La izquierda en América Latina adquirió entonces tintes más populistas, movilizando coaliciones heterogéneas de sensibilidades plebeyas e interpelando a un “pueblo” indefinido. Incluso en México, López Obrador —líder de una izquierda partidista institucionalizada, a diferencia de *outsiders* como Chávez, Morales o Correa— recurrió a partir de 2006 a una retórica de contraposición del “pueblo”, síntesis de todas las capas e identidades, contra “la élite”. Así llegó finalmente al poder en 2018, no bajo las siglas del PRD, pero tras vaciar a ese partido.

Si el trabajo ya no cumple esta función de estructurar la sociabilidad, ¿qué hay de otros espacios? Como parte del legado histórico del Estado posrevolucionario, la sociedad civil mexicana se caracteriza por su baja densidad y bajo nivel de insti-

tucionalidad. En 2008, el primer dato disponible, apenas 1.2 millones de personas trabajaban voluntariamente en instituciones privadas sin fines de lucro y 547 mil como personal remunerado.¹⁵ Entre ambos, sólo un 3.8% de la población en edad de trabajar. El mayor porcentaje de participación voluntaria ocurre en escuelas e iglesias, seguidos del barrio o la colonia. En la estimación más incluyente, en 2018 existían en México 4.6 organizaciones de la sociedad civil por cada 10 mil habitantes (Centro Mexicano para la Filantropía 2019), un fuerte contraste con países como Estados Unidos con 65, Chile con 64 o Argentina con 29 (Muñoz Grandé 2014, 56).¹⁶

Desde su surgimiento, el PRD opera entonces en un entorno de alta fragmentación social. Y pese a todo, es el partido que más conectaba con nuevos movimientos sociales y asociaciones cívicas. La excepción son los grupos católicos tradicionalmente vinculados al PAN —el principal sector social que, desde las batallas de los veinte y los treinta, se mantiene densamente organizado y logra escapar el control corporativo del Estado—. El PAN construye también vínculos con nuevas asociaciones de matriz empresarial. No obstante, en sus años formativos, el PRD consigue dar voz en la arena electoral a formaciones de la sociedad civil con base popular. Es, otra vez, el partido que da forma y expresión democrática a nuevos agravios populares

¹⁵ INEGI, sistema de cuentas nacionales, series de personal remunerado y trabajadores voluntarios en instituciones privadas sin fines de lucro.

¹⁶ El número de organizaciones proviene del Centro Mexicano para la Filantropía (2019) e incluye las organizaciones inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC); organizaciones con autorización para otorgar recibos deducibles del impuesto sobre la renta (donatarias); sindicatos, federaciones y confederaciones; colegios de profesionistas; asociaciones religiosas; y organizaciones políticas. La tasa por habitante se calculó con las estimaciones de población del CONAPO.

en medio del cambio social. El debilitamiento de sus lazos con esas organizaciones es, después, parte de su crisis.

ECONOMÍA PERSONAL Y DESIGUALDADES REGIONALES

La reorientación de la política del Estado hacia el liberalismo de mercado, el gran giro programático de la era analizada en este ensayo, transformó la estructura productiva del país y la intensidad de su relación con el mundo. Bajo administraciones del PRI y el PAN, México se convierte en una de las economías más abiertas del mundo, y con Chile, la más abierta de América Latina, con trece tratados de libre comercio que cubren relaciones con 50 países (Secretaría de Economía 2015). Además, en contraste con otros países de la región, son las manufacturas (autos y autopartes, electrónicos, maquinaria, etcétera), no los bienes primarios, las que lo convierten en una de las principales economías exportadoras del mundo —en 2017, la novena—. ¹⁷ Esto da cuenta de la aguda transformación industrial experimentada en el sector exportador, en buena parte derivado del aumento en la inversión extranjera.

La reorganización económica lleva el comercio exterior de 22 puntos del PIB en 1980, a 80 en 2018, con un ascenso vertiginoso tras la firma del TLCAN. ¹⁸ El comercio se encuentra poco diversificado. El exterior para México significa Estados Unidos, que en la década de los 2010 recibe cerca del 80% de las exportaciones mexicanas. El sector exportador, en especial

¹⁷ AJG Simoes, CA Hidalgo. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. <https://oec.world/en/profile/country/mex/>

¹⁸ Banco Mundial, comercio como porcentaje del PIB. <https://datos.bancomundial.org/indicador/ne.trd.gnfs.zs>

el manufacturero, se convierte en el principal motor del crecimiento —anémico, por lo demás. Con tal grado de apertura y dependencia, el país se vuelve muy vulnerable a los *shocks* derivados de las fluctuaciones en la economía estadounidense.

Este cambio tectónico en la economía tiene, además, muy distintas repercusiones y manifestaciones regionales. Los indicadores nacionales enmascaran agudas desigualdades entre los estados del país. A grandes trazos, el grueso de las ganancias de la integración económica fue capturada por las entidades geográficamente más próximas a Estados Unidos, así como aquellas con mayores dotaciones iniciales de infraestructura, capital físico y humano (Chiquiar 2005). La brecha norte-sur es desde luego persistente, pero una mirada histórica muestra que su profundidad varía con los modelos económicos desde fines del siglo XIX (Aguilar-Retureta 2016) from the early stages of domestic market integration to the present day (1895-2010). Las etapas de exportación han profundizado la desigualdad regional, que se expresa con claridad en las mayores ganancias recientes para el norte y occidente.

Entre 1988 y 2018 —una generación, desde el nacimiento del PRD— el PIB per cápita de la Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Coahuila crece a una tasa anual promedio de entre 2.5% para los más altos y 1.8% para los más bajos. Para Campeche, Chiapas y Tabasco, la tasa es negativa; Tlaxcala, Quintana Roo (por el crecimiento poblacional), Baja California, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Colima y Veracruz tienen todos una tasa promedio anual menor al 1% en el mismo periodo.

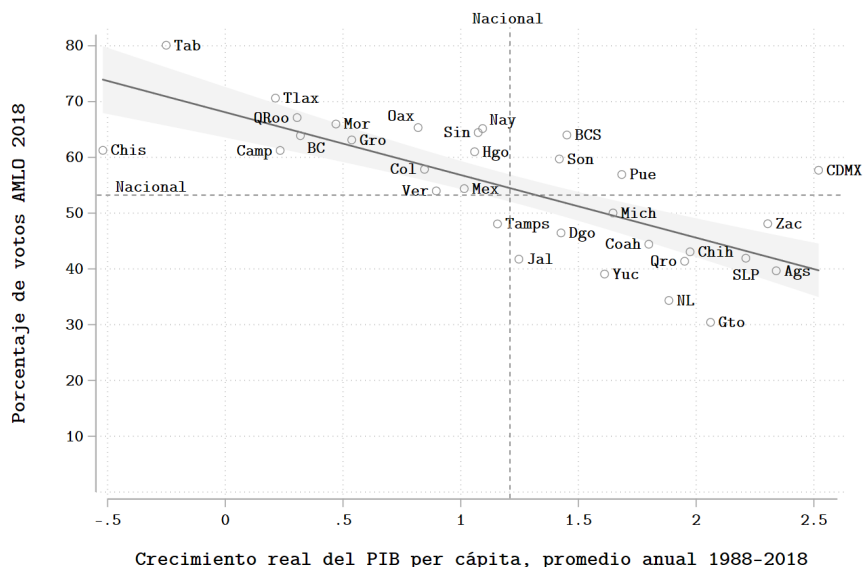
Con la irrupción del PRD en la arena electoral, la profundización de las desigualdades regionales se refleja fielmente en

los alineamientos partidistas. Nos encontramos aquí frente a la que es, quizá, la manifestación más patente de la capacidad del sistema de partidos de la transición de encauzar el conflicto distributivo, que tiene en las fortunas económicas de las distintas regiones una de sus caras más visibles. Después de la alternancia, PRI y PAN se rotan en como la principal opción promercado en las distintas elecciones presidenciales (PAN en 2006 y 2018; PRI en 2012). La lógica de la competencia nacional es clara: PRI o PAN para la continuidad del modelo, PRD (y luego Morena) para expresar descontento.

El desempeño estatal de los partidos en las elecciones presidenciales así lo comprueba. En las entidades relativamente beneficiadas de las últimas décadas, el candidato del PRI o del PAN es dominante, según la elección —si bien el PRI logra también movilizar apoyo de sus bases tradicionales rurales en el centro-sur. El PRI, aprovechando su vieja implantación, compete en esencia en dos pistas: con el PAN en el norte y, con otro rostro, en el sur con el PRD. La izquierda, si embargo, se consolida en las elecciones presidenciales como la voz de los estados perdedores del modelo económico, manteniéndose en segundo lugar en 2006, 2012 y finalmente triunfando —tras la escisión en el PRD— en 2018.

Es decir, el sistema de partidos de la democracia mexicana puede entenderse como un espacio de competencia en torno a los resultados del modelo económico en los últimos treinta años. Más allá del ruido en las campañas y las estrategias publicitarias, este factor estructural organiza los alineamientos. La figura 6 muestra la fuerte relación entre el crecimiento promedio del PIB per cápita en las entidades federativas desde 1988, año de la primera elección con la izquierda partidista actual, y el porcentaje de voto por López Obrador en 2018, una elección

Figura 6. Desempeño económico de las entidades federativas bajo el modelo de mercado y voto por López Obrador en 2018



Nota: Cálculos propios con base en información del INEGI, INE y CONAPO. El área sombreada muestra un intervalo de confianza de 90% alrededor de la predicción lineal. Para Campeche se consideraron sólo actividades primarias y terciarias, para evitar la distorsión de las cifras por la producción petrolera que se contabiliza en el PIB de esa entidad.

de referéndum acerca del *statu quo*. Si bien para esta elección López Obrador rompe con el PRD, se lleva consigo el grueso de la estructura, las banderas y el voto del partido.

Los retornos del modelo de mercado, como puede verse, predicen con bastante precisión la intensidad del apoyo por el candidato tradicional de la izquierda entre los diferentes estados. Los casos se aglutinan en el cuadrante superior izquierdo —aquellos estados con pobre crecimiento económico en las últimas décadas, inferior al promedio nacional, que otorgan hasta 60% o 70% del voto a López Obrador— y en el inferior dere-

cho, en el que se ubican estados con buen desempeño económico relativo y en los que la oposición, en conjunto, consigue una mayoría absoluta del voto. Incluso en esta elección atípica, por el alto porcentaje de votos del ganador y la capacidad de López Obrador de movilizar apoyo en estados del norte que habían resultado impenetrables para el PRD, las fortunas electorales de los partidos están atadas al desempeño del modelo de mercado y su impacto desigual.

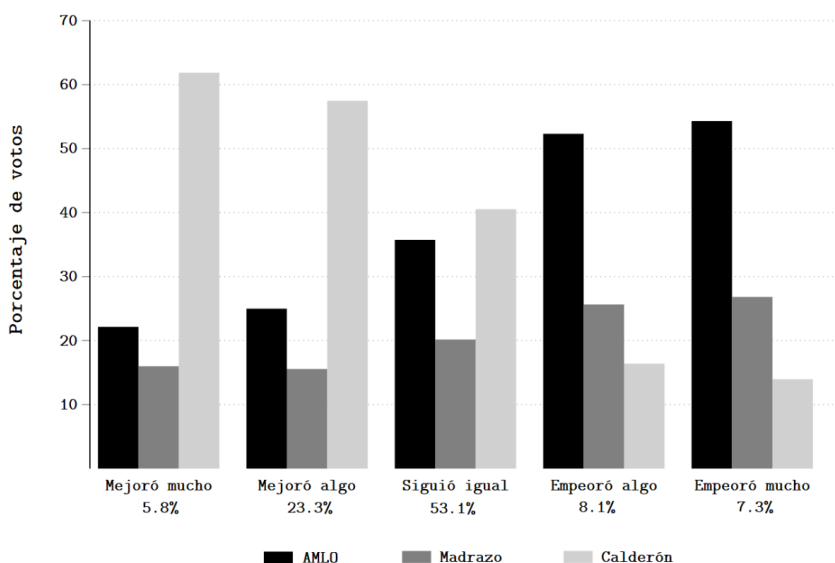
En elecciones anteriores el patrón es similar. La potencia electoral del PRD en sus treinta años de vida reside en su capacidad de politizar el descontento de los perdedores con el sistema económico vigente. Si descontamos el 2018 por constituir también, después de todo, una derrota para el PRD, el momento cumbre de esa historia de resistencia ocurre en 2006. Esa elección se da en medio del giro a la izquierda en toda América Latina, después de las décadas del ajuste económico. Como se mencionó antes, las restrictivas condiciones económicas en la transición al mercado, aunadas al cambio social, habían creado un contexto muy desfavorable para las fuerzas de izquierda en los ochenta y noventa. Para inicios de los 2000, la estabilización de las economías y el boom de las *commodities* crean condiciones más permisivas. La izquierda en la región se reagrupa y comienza una oleada de victorias electorales que lleva a dos terceras partes de los latinoamericanos a ser gobernados por fuerzas de esa orientación (Levitsky and Roberts 2011). México evade la ola por 0.58 puntos porcentuales —en su lugar queda un agrio conflicto poselectoral.

Datos individuales de esa elección son consistentes con el patrón discutido, según el cual el sistema de partidos se ancla en los retornos relativos del modelo de mercado. En 2006, López Obrador apenas supera el 20% del voto entre quienes

consideraban que su situación económica personal había mejorado durante la administración de Vicente Fox, mientras Felipe Calderón triunfa con alrededor del 60%. El respaldo por el candidato del PAN desciende en escalera conforme empeora la percepción económica. Más de 50% de quienes sintieron un deterioro en su situación económica, en cambio, respaldaron al candidato de la izquierda. La naturaleza disputada de la elección se observa entre quienes consideraban que su situación se había mantenido igual, con una ligera ventaja para Calderón.

En síntesis, el PRD es, hasta su escisión, el canal partidista para el descontento en la sociedad de mercado que se instala en

Figura 7. Situación económica personal bajo el gobierno de Fox y voto presidencial en 2006



Fuente: Cálculos propios con base en estudio de panel México 2006 (Lawson et al. 2007), utilizando la pregunta, “Desde que llegó Fox a la Presidencia, ¿usted diría que su situación económica personal ha mejorado, ha empeorado, o sigue igual?”

México. Los varios malestares propios de esa sociedad rebasan el umbral de lo social y se expresan en la política democrática —propriadamente en la arena electoral— por vía de un partido que, en su ríjosa vida interna y obstinada oposición, es reflejo de una sociedad tensionada.

Conclusiones comparativas: politización de la desigualdad y estabilidad de la competencia democrática

Los procesos de cambio económico y social revisados en este capítulo no son exclusivos de México. En sus componentes fundamentales, definieron la experiencia de las últimas décadas en gran parte de América Latina. La forma en que se manifestaron políticamente, sin embargo, varió entre diferentes casos en función de la capacidad de los sistemas de partidos de absorber las tensiones que emanaban de la sociedad. Hasta aquí he sostenido que en México, el PRD sirvió como una cámara de procesamiento, dentro del marco institucional, de los principales malestares en un contexto de cambio profundo.

La relación del PRD con las instituciones establecidas fue tensa desde su nacimiento. En algunos momentos, hasta esquizofrénica. Se trata de un partido que quería actuar y actuaba dentro del “sistema”, pero a la vez le negaba una legitimidad fundamental. Es así, insisto, desde su origen. Tras la fraudulenta elección de 1988, segmentos de la coalición de las izquierdas veían la ruptura como el único camino posible. Prevaleció la corriente reformista, de modo que el PRD terminó contribuyendo de manera decisiva a la democratización por la vía electoral. Aun así, acosado desde el poder durante el

salinismo, el partido fue siempre la oposición más intratable y renuente a la cooperación.

Después de la transición, por su inconformidad visceral con el estado de las cosas negaba la existencia misma de la democracia que había contribuido a edificar. En 2006, desconoció contra las evidencias su derrota en las urnas —en unas elecciones manchadas por la intervención gubernamental para tratar de desaforar a su candidato natural y por la compra ilegal de publicidad electrónica por parte del sector empresarial, pero libres y limpias en el conteo. Desde entonces se convirtió en un crítico acérrimo de las autoridades electorales. Negó la existencia misma de comicios mínimamente limpios y equilibrados. Al mismo tiempo, siguió participando en ellos, con el generoso financiamiento y acceso a los medios otorgados por el sistema electoral en el país. En 2012, volvió a cuestionar la legitimidad democrática de los ganadores. En 2018, su segundo líder histórico ganó bajo otras siglas, pero dijo hacerlo pese a la parcialidad de las autoridades electorales. En ello ha radicado la esquizofrenia del PRD y la izquierda mexicana: ser partícipe y beneficiaria de un sistema institucional que no termina por abrazar.

Aun así, con un pie dentro del sistema institucional y otro en sus fronteras, el PRD tuvo un importante efecto estabilizador. Su aparición temprana en el proceso de reforma de mercado habilitó un conducto a través del cual el malestar social de amplios sectores pudo desfogarse en el sistema partidista. Pese a sus ambigüedades, mantuvo una apuesta decidida por la competencia electoral. Si se quería expresar descontento, estaban las elecciones y en ellas el PRD.

Una reorganización económica y social de la magnitud que vivió el país desde los ochenta implicaba, por definición, la aparición de potentes actitudes contestarias, sensibilidades

“plebeyas” y sensaciones de agravio. Esas convulsiones tenían la fuerza suficiente para romper el molde de la política democrática y la continuidad institucional. La capacidad del PRD de asimilar y conducir el magma social hacia el terreno electoral fue, por tanto, un mecanismo de estabilización del sistema partidario e institucional en su conjunto.

Si las corrientes de cambio económico y social en México no fueron excepcionales, sí lo fue este tipo de desahogo político en el que el PRD desempeñó un papel protagónico. México pertenece a una familia de países en América Latina en la que fueron partidos de masas surgidos de la primera etapa de incorporación popular en la región a partir de los años treinta, o partidos con orientación tradicional hacia el centroizquierda, los que implementaron desde el poder las reformas de mercado (Roberts 2014). Como el PRI en México, Acción Democrática en Venezuela, el Peronismo argentino, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en Bolivia o Izquierda Democrática en Ecuador viraron hacia el liberalismo económico y comandaron la desarticulación del modelo estatista con el que estaban identificados.

Partidos de masas como el PRI estaban profundamente ligados con las políticas desarrollistas y los esquemas de representación corporativa. El desarraigo del modelo estatista fue mucho más traumático en estos casos, con crisis económicas e inflacionarias profundas. El viraje hacia el mercado implicaba el rompimiento de modos de representación de intereses, negociación intersectorial y vinculación Estado-sociedad en los que descansaba el orden político. Al encabezar estas medidas, Acción Democrática, el MNR, el peronismo o el PRI imponían grandes costos a sus bases populares tradicionales, en especial el sector obrero. En todos estos países, la reversión programáti-

ca fue muy desestabilizante para la competencia electoral en el mediano plazo, a excepción de México, en donde el PRD pudo amortiguar la reacción social.

La contribución crítica del PRD fue dotar al sistema de partidos mexicano, desde temprano en el proceso de ajuste económico, de una propiedad crucial de los sistemas representativos: la polaridad. A falta del PRD, la confluencia del PRI y el PRI en el liberalismo de mercado habría dejado sin voz en la arena electoral a sectores perjudicados e inconformes con las consecuencias distributivas y sociales del nuevo modelo. La oposición del PRD fue tradicionalmente vista por los defensores de las reformas económicas como un lastre en el proceso de modernización. En esta narrativa, ese partido impedía una transición políticamente tersa y se interponía en el desarrollo al obstaculizar cambios necesarios. Representaba, de hecho, todo lo que se debía dejar atrás: el estatismo, el subvencionismo y el proteccionismo de un Estado obeso. El PRD había surgido en oposición al cambio —un partido de *reacción*, con banderas anticuadas.

No obstante, el tiempo dejaría en claro las ventajas democráticas de la resistencia institucionalizada del PRD. En los países donde el modelo de libre mercado envolvió hegemoníicamente al sistema de partidos, la falta de salidas institucionales al disenso provocó explosiones sociales, fluidez electoral y movimientos populistas contestarios muy disruptivos (Roberts 2013, 2014). Terminado el ciclo de ajuste de los ochenta y noventa, la inconformidad rebasó al sistema representativo establecido. En la mayoría de los casos —salvo Argentina, donde el peronismo se fracturó y terminó canalizando la oposición al modelo por vía del kirchnerismo— la democracia declinó hacia el autoritarismo competitivo, con un fuerte componente personalista.

El perfil organizativo de la reacción social varió entre los casos. En Venezuela, a la violencia anómica del “Caracazo” de 1989 siguió el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992 y finalmente su triunfo electoral en 1998. El chavismo barrió con todos los partidos establecidos y montó un régimen redistributivo muy popular, fundado en las rentas del petróleo. Sin embargo, la democracia venezolana degeneró en un régimen de autoritarismo competitivo (Levitsky and Way 2010) y, con el paso del tiempo, una dictadura militar incapaz de sostener la economía.

En Ecuador, varias presidencias interrumpidas antes del fin de mandato, por la fuerte protesta social, terminaron con la elección del líder populista Rafael Correa. Bajo el correísmo, reformas sociales y un cierto fortalecimiento del Estado ecuatoriano convivieron con recortes de las libertades políticas y dificultades para la oposición para competir en pie de igualdad. En Bolivia, las guerras del agua y del gas de principios de la década de 2000 desembocaron finalmente en la victoria de Evo Morales en 2005, a la cabeza de un movimiento de base popular mucho más densamente organizado que el chavismo (Anria 2019). Como en Venezuela, el sistema de partidos preexistente implosionó.

Los movimientos sociales agrupados en el MAS ejercían una labor de contrapeso inexistente en el chavismo, donde la movilización popular se encontraba mucho más subordinada. Morales, además, encabezó un proyecto de inclusión social fundado sobre bases económicas más sólidas, empezando por el fortalecimiento fiscal del Estado a través de los impuestos a la industria extractiva. La redistribución alcanzada, así como la subversión de rígidas jerarquías sociales, son inéditas para América Latina fuera de un contexto revolucionario. No obstante, el cariz populista del régimen cerró los espacios

al pluralismo y desequilibró fundamentalmente la competencia democrática. La ambición reeleccionista de Morales terminó en una crisis política en 2019, con el régimen político a la deriva.

Al adoptar el modelo de mercado, partidos que como el PRI iban en contra de sus posiciones programáticas tradicionales estaban rompiendo los anclajes sociales del Estado y trastocando los fundamentos del sistema representativo. Por esa razón, como ha explicado Roberts, su viraje resultó profundamente disruptivo para la competencia democrática y alimentó reacciones populistas que cargaron contra el orden constitucional. México siguió otro camino, de mayor estabilidad política, debido a que el PRD otorgó al sistema de partidos una polaridad de la que carecieron esos otros países durante las décadas de ajuste.

Desde una óptica pluralista, la oposición del PRD fue un valor democrático, pues aseguró que sectores que demandaban compensación o protección de las inseguridades del mercado encontraran significado en las contiendas electorales. Virtuosa-mente, politizó pronto la desigualdad, las carencias y los costos sociales de la nueva época. A diferencia de lo sucedido en otros países, el antagonismo político se alineó con las divisiones que se abrían en la sociedad, ante un cambio abrupto en la organización económica y del Estado. Esa presencia contestataria dio equilibrio a la política democrática.

Un reflejo de ello se encuentra en los niveles de volatilidad electoral. Pese a todos los cambios subyacentes, México mantuvo en sus primeras dos décadas de democracia el sistema de partidos menos volátil de la región junto con Uruguay (Greene and Sánchez-Talanquer 2018). Tal estabilidad permite a los votantes orientarse en la política y formular mandatos programáticos a través de las elecciones. La propia durabilidad del PRD es excepcional. Entre 1978 y 2005, se fundaron en América Latina

307 partidos que alcanzaron al menos 1% del voto legislativo en una elección. De ellos, sólo 11 han logrado ganar al menos 10% del voto en cinco elecciones legislativas consecutivas. Es decir menos del 4% de los partidos de la tercera ola de la democracia en la región echaron raíces (Levitsky et al. 2016).

El secreto del éxito perredista durante treinta años fue su capacidad de abanderar la inconformidad con lo establecido. Que un movimiento emanado del PRD, como el lopezobradorismo, haya llegado al poder llevándose consigo esa insignia es una de las crueles paradojas de la política. Fundado para conquistar la presidencia, el partido se encuentra hoy más lejos de ella que nunca antes. Forjado a fuego y hierro en la oposición, enfrenta el desafío de reinventarse en ella. ¿Lo conseguirá?

Referencias

- AGUILAR-RETURETA, JOSÉ. 2016. "Regional Income Distribution in Mexico: New Long-Term Evidence, 1895–2010." *Economic History of Developing Regions* 31(2–3): 225–52.
- ANRIA, SANTIAGO. 2019. *When Movements Become Parties: The Bolivian MAS in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- ANTÓN, ARTURO, FAUSTO HERNÁNDEZ TRILLO, and Santiago Levy. 2012. *The End of Informality in Mexico?: Fiscal Reform for Universal Social Insurance*. New York: Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-End-of-Informality-in-Mexico-Fiscal-Reform-for-Universal-Social-Insurance.pdf>.
- BENSUSÁN, GRACIELA, AND KEVIN J. MIDDLEBROOK. 2013. *Sindicatos y Política En México: Cambios, Continuidades y Contradicciones*. México, D.F.: Flacso México, Universidad Autónoma Metropolitana, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- BRUHN, KATHLEEN. 1997. *Taking on Goliath: The Emergence of a New Left Party and the Struggle for Democracy in Mexico*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- CENTENO, MIGUEL ANGEL. 1994. *Democracy Within Reason: Technocratic Revolution in Mexico*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 2006. *Evolución y Estadísticas de Gasto Público Federal En México, 1980-2006*. Cámara de Diputados. <https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0492006.pdf>.

- CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA. 2019. *Compendio Estadístico Del Sector No Lucrativo 2019*. México: Cemefi. <https://www.cemefi.org/images/pdf/CIFBIBLIOTECA/p30.pdf>.
- CHIQUIAR, DANIEL. 2005. "Why Mexico's Regional Income Convergence Broke Down." *Journal of Development Economics* 77(1): 257-75.
- COMBES, HÉLÈNE. 2011. *Faire Parti: Trajectoires de Gauche Au Mexique*. Paris: Karthala.
- CONSAR. 2019. *Diagnóstico de La Generación AFORE IMSS*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509334/2_AP-nov-19_Diagno_stico_IMSS_GA.pdf.
- CONVERSE, PHILIP E. 1969. "Of Time and Partisan Stability." *Comparative Political Studies* 2(2): 139-171.
- DÍAZ CAYEROS, ALBERTO, FEDERICO ESTEVEZ, AND BEATRIZ MAGALONI. 2016. *The Political Logic of Poverty Relief: Electoral Strategies and Social Policy in Mexico*. New York: Cambridge University Press.
- DÍAZ-DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO, AND ALEJANDRO MORENO. 2015. "Effects of #YoSoy132 and Social Media in Mexico's 2012 Presidential Campaigns." In *Mexico's Evolving Democracy: A Comparative Study of the 2012 Elections*, eds. Jorge I. Domínguez, Kenneth F. Greene, Chappell H. Lawson, and Alejandro Moreno. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 227-48.
- FLORES-MACÍAS, GUSTAVO A., AND MARIANO SÁNCHEZ-TALANQUER. 2019. "The Political Economy of NAFTA/USMCA." In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, Oxford University Press. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1662> (April 20, 2020).
- GARAY, CANDELARIA. 2016. *Social Policy Expansion in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- GIBSON, EDWARD L. 1997. "The Populist Road to Market Reform: Policy and Electoral Coalitions in Mexico and Argentina." *World Politics* 49(3): 339-70.
- GREENE, KENNETH F. 2011. "Campaign Persuasion and Nascent Parti-

- sanship in Mexico's New Democracy." *American Journal of Political Science* 55(2): 398–416.
- GREENE, KENNETH F., and Mariano Sánchez-Talanquer. 2018. "Authoritarian Legacies and Party System Stability in Mexico." In *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, ed. Scott Mainwaring. New York: Cambridge University Press, 201–26.
- HOLLAND, ALISHA C., AND BEN ROSS SCHNEIDER. 2017. "Easy and Hard Redistribution: The Political Economy of Welfare States in Latin America." *Perspectives on Politics* 15(4): 988–1006.
- DE JANVRY, ALAIN, KYLE EMERICK, MARCO GONZALEZ-NAVARRO, AND ELISABETH SADOULET. 2015. "Delinking Land Rights from Land Use: Certification and Migration in Mexico." *American Economic Review* 105(10): 3125–49.
- DE JANVRY, ALAIN, MARCO GONZALEZ-NAVARRO, AND ELISABETH SADOULET. 2014. "Are Land Reforms Granting Complete Property Rights Politically Risky? Electoral Outcomes of Mexico's Certification Program." *Journal of Development Economics* 110: 216–25.
- DE JANVRY, ALAIN, GUSTAVO GORDILLO, AND ELISABETH SADOULET. 1997. *Mexico's Second Agrarian Reform: Household and Community Responses, 1990-1994*. La Jolla: Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- KAPLAN, STEPHEN B. 2013. *Globalization and Austerity Politics in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- KLESNER, JOSEPH L. 2005. "Electoral Competition and the New Party System in Mexico." *Latin American Politics and Society* 47(2): 103–42.
- _____. 2009. "A Sociological Analysis of the 2006 Elections." In *Consolidating Mexico's Democracy: The 2006 Presidential Campaign in Comparative Perspective*, eds. Jorge I. Domínguez, Chappell H. Lawson, and Alejandro Moreno. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 50–70.
- LAWSON, CHAPPELL, Andy Baker, Kathleen Bruhn, Roderic Camp, Wayne Cornelius, Jorge Domínguez, Kenneth Greene, Beatriz Magaloni, James McCann, Alejandro Moreno, Alejandro Poi-

- ré, and David Shirk. 2007. "The Mexico 2006 Panel Study." <https://mexicopanelstudy.mit.edu/mexico-panel-studies>
- LAWSON, CHAPPELL, Jorge Domínguez, Kenneth Greene, and Alejandro Moreno. 2013. "The Mexico 2012 Panel Study." <https://mexicopanelstudy.mit.edu/mexico-panel-studies>
- LEVITSKY, STEVEN, JAMES LOXTON, BRANDON VAN DYCK, AND JORGE I. DOMÍNGUEZ, eds. 2016. *Challenges of Party-Building in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- LEVITSKY, STEVEN, AND KENNETH M. ROBERTS, eds. 2011. *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- LEVITSKY, STEVEN, AND LUCAN WAY. 2010. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. New York: Cambridge University Press.
- MORENO, ALEJANDRO. 2018. *El Cambio Electoral: Votantes, Encuestas y Democracia En México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MUÑOZ GRANDÉ, HUMBERTO. 2014. *Entrampado Institucional de Las Organizaciones de La Sociedad Civil En México*. México: Cemefi.
- PEW RESEARCH CENTER. 2015. "More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S." Washington, D.C. <https://www.pewresearch.org/hispanic/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/>.
- PIKETTY, THOMAS. 2019. *Capital e ideología*. Barcelona: Deusto.
- POLANYI, KARL. 2014. *Los Límites del Mercado: Reflexiones Sobre Economía, Antropología y Democracia*. Madrid: Capitán Swing.
- ROBERTS, KENNETH M. 2002. "Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era." *Studies in Comparative International Development* 36(4): 3–33.
- _____. 2013. "Reforma De Mercado, (des)alineamiento Programático y Estabilidad Del Sistema De Partidos En América Latina." *América Latina Hoy* 64: 163–91.
- _____. 2014. *Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era*. New York: Cambridge University Press.
- ROS, JAIME. 2013. *Algunas Tesis Equivocadas Sobre El Estancamiento*

- Económico de México*. Ciudad de México: Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- SÁNCHEZ TALANQUER, MARIANO. 2019. "Las Huellas Del Pasado. Legados Representativos de La Era Del PRI." In *Las Caras de Jano: Noventa Años Del Partido Revolucionario Institucional*, eds. Mariano Sánchez Talanquer and Ricardo Becerra. Ciudad de México: CIDE, 305-38.
- SCHEVE, KENNETH, AND DAVID STASAVAGE. 2016. *Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe*. Princeton: Princeton University Press.
- SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2015. *Comercio Exterior / Países Con Tratados y Acuerdos Firmados Con México*. Secretaría de Economía. <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico>.
- TEMKIN, BENJAMÍN, AND JORGE CRUZ. 2019. "Determinantes subnacionales de la informalidad laboral en México." *Revista Internacional de Estadística y Geografía* 10(2): 46-61.
- THERBORN, GÖRAN. 2012. "Class in the 21st Century." *New Left Review* (78): 5-29.
- WELTI CHANES, CARLOS. 2015. *¡Qué familia!: la familia en México en el siglo XXI*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.